LAS INTERVENCIONES REALES EN LOS PLEITOS DEL REAL PATRONATO

Antonio CARRASCO RODRÍGUEZ

Universidad de Alicante

Resumen

Desde el Concilio de Trento, los monarcas españoles se consideraron protectores de la Iglesia nacional. Este sentimiento se acentuó con el advenimiento de la dinastía borbónica, en directa conexión con el auge de las posturas regalistas. En el presente artículo se analiza una de las principales manifestaciones de esa labor de protección: las intervenciones de Felipe V, Fernando VI y Carlos III en los pleitos tocantes al Real Patronato, la principal de las regalías de la Corona española.

Abstract

Spanish monarchs considered themselves as protectors of the national Church from the Council of Trent. This feeling grew with the advent of the Bourbonic dynasty, in direct connection with the summit of the postures that defended the royal prerogatives. In the present article one of the principal demonstrations of that labor of protection is analyzed: the interventions of Felipe V, Fernando VI and Carlos III in the relatives cases to the royal patronage, the principal of the royalties of the Spanish crown.

0. INTRODUCCIÓN

Desde el Concilio de Trento, los monarcas españoles se consideraron protectores de la Iglesia nacional. Este sentimiento se acentuó con el advenimiento de la dinastía borbónica, en directa conexión con el auge de las posturas regalistas. De este modo, el espectro de competencias soberanas del rey penetró no sólo en las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, sino en todas las expresiones de la vida de la Iglesia española, ordenada «*bajo el poder civil*»¹.

En este sentido, el Patronato Real constituía, al mismo tiempo que un derecho útil (acceso a cuantiosas rentas, formación de una red de fidelidades mediante la pro-

1. T. Egido: «El Regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII», en R. García-Villoslada (dir.): *Historia de la Iglesia en España*, t. IV, B.A.C., Madrid, 1979, p. 139.

moción de clérigos), un derecho oneroso, puesto que el rey debía proteger a la Iglesia y atender a su manutención².

Al monarca, entre otros muchos cometidos, le correspondía mirar por la «salud» religiosa de sus vasallos. Era deber suyo levantar iglesias, proteger el culto de las parroquias, promover la religión valiéndose de un clero y, sobre todo, de un episcopado adicto; fijar las fechas de las solemnidades y fiestas litúrgicas, preservar el ambiente de las doctrinas dañosas, etc.³.

Además, se creía en la obligación de coartar determinados hechos que consideraba abusos: la acumulación de bienes de manos muertas, el excesivo número de clérigos, el abandono del clero rural, la deficiente formación intelectual y la vida indisciplinada de los regulares⁴.

Otro de los deberes del rey como patrón de la Iglesia nacional era intervenir en determinados pleitos. Por considerarse parte atacada, en los relacionados con el Real Patronato y la defensa de las regalías de la Corona (ante cualquier intromisión pontificia o ante la intención de algún eclesiástico de beneficiarse ilícitamente acudiendo a Roma). O porque las sentencias de determinadas lites eran recurridas hasta llegar, tras diversas apelaciones, hasta la misma Cámara de Castilla. O como respuesta a una representación realizada por algún afectado en contra de lo prescrito por la ley.

El objeto del presente artículo es analizar las intervenciones de los tres primeros Borbones⁵ en dichos litigios judiciales, en un ámbito tan concreto como conflictivo: el Principado de Cataluña. Para ello, estudiaremos los fondos de la Secretaría de Gracia, Justicia y Real Patronato de la Corona de Aragón y, en concreto, del Real Patronato, pertenecientes a la Cámara de Castilla y conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, prestando especial atención a los libros 280, 281, 282 y 283 de la serie «*Registros del Real Patronato*», los alusivos a Cataluña.

En la documentación hallamos una amplia y variada casuística de difícil categorización. Pese a ello, estableceremos un orden en atención a los diversos asuntos tratados en los pleitos: cuestiones de patronato (tanto del Real Patronato, como de otras modalidades –patronato de donatarios, patronato de laicos, influencias del Concordato de 1753–); pleitos por uso indebido de bulas, breves y rescriptos pontificios; lites motivadas por enajenaciones ilegales de propiedades eclesiásticas; expedientes con intervención de obispos por creer disminuidos sus privilegios, facultades y jurisdicciones; litigios referentes a los problemas surgidos a los abades de monasterios (principalmente los de la Congregación Benedictina Claustral) con comunidades de presbíteros, con las autoridades seculares, o con particulares; pleitos por cuestiones monetarias –cobro ilícito de rentas–; y un largo etcétera.

Además, haremos referencia a las intervenciones reales a la hora de designar el orden de arbitraje y los tribunales competentes en los casos en que las partes están su-

2. Ch. Hermann: *L'Église d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834)*, Madrid, 1988, pp. 43-44.

3. R. Olaechea: *Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII*, Zaragoza, 1985, p. 12.

4. V. Pinto Crespo: «Una reforma desde arriba: Iglesia y religiosidad», capítulo del libro del Equipo Madrid: *Carlos III, Madrid y la Ilustración*, Madrid, 1988, p. 157.

5. Obviando el breve reinado de Luis I.

jetas a distintas jurisdicciones, y también en la instigación y firma de concordias entre distintas prelacías.

1. DEFENSA Y EXTENSIÓN DEL REAL PATRONATO

El grueso de las intervenciones reales en pleitos judiciales tuvo su causa en la defensa del Real Patronato y de las regalías de la Corona. Un caso prototípico de defensa de dichas prerrogativas y derechos, a lo largo de más de un siglo, es el del priorato regular de la Colegiata de Santa María de Meyá, perteneciente a la Congregación Benedictina Claustral y, por tanto, al Patronazgo Regio.

Para su análisis, nos remontaremos hasta 1678, año en que, a raíz de una vacante, Carlos II se decidió a investigar si podía proceder o no a la nominación del prior del referido beneficio. Para ello, con urgencia, reclamó informes al virrey, a la Audiencia de Barcelona y al Consejo de Aragón. El máximo representante real en el Principado afirmó que sí pertenecía al rey el derecho de presentación en dicha pieza eclesiástica. Pero no ocurrió lo mismo en la Audiencia y el Consejo de Aragón, pues «*en uno y otro tribunal hubo variedad de votos*» sobre el patronato. También envió «*el Hechizado*» una embajada a Roma «*para ver si se hallaba disposición para que fuese de real provisión*».

Sin embargo, antes de que el monarca pudiera ejercer su presunto derecho, el sumo pontífice se le adelantó, expidiendo las bulas de la prebenda en favor de Diego de Matas.

Pese a ello, no dio su brazo a torcer Carlos II, sino que, al contrario, y para ganar tiempo, echó mano a una de sus poderosas armas y negó el *exequatur* a dichos escritos apostólicos. Así, quedaron retenidos en el Consejo de Aragón hasta 1680, fecha en que el embajador en Roma, tras realizar esforzados trabajos, escribió diciendo que se encontraban grandes dificultades para obtener la declaración del derecho de Real Patronato, «*por ser tan dudoso como lo manifestaba el no haber nunca presentado Vuestra Majestad a algún sujeto*». Y el rey, sin más remedio, y tras hacer manifiestas sus quejas, tuvo que dictaminar que se le entregaran a Matas las bulas y se le pusiera en posesión del priorato.

No obstante, a raíz del fallecimiento de Diego de Matas en 1696, los mecanismos reales de defensa del Real Patronato actuaron con celeridad, siendo nombrado nuevo prior de Santa María de Meyá Benito de Torres.

No pudo, sin embargo, disfrutar Torres de su beneficio, ni tampoco el monarca español de su victoria sobre la Santa Sede, puesto que el Cardenal Júdice, ministro en Roma, escribió al rey que el papa había dado bulas de coadjutoría al doctor José Salvador⁶. Ofuscado por tal contratiempo, el monarca ordenó que éstas quedaran reteni-

6. J. A. Pujol Aguado: *La Corona de Aragón en la Cámara de Castilla (1709-1721)*, Alicante, 1994, pp. 548 *et alii*. Una práctica bastante extendida en la vida capitular durante el XVII fue la donación de ciertos beneficios y prebendas en coadjutoría. El sistema de coadjutorías permitía adscribir a determinados beneficios a un individuo para que asistiese a su titular en el desempeño de sus funciones. Esta práctica se vio sometida a ciertos abusos y extravíos, derivando en algunos casos en la patrimonialización del beneficio por sus titulares y en la transmisión hereditaria del mismo. Fue fomentada por la Santa Sede puesto que le permitía intervenir ladinamente en el gobierno de determinados beneficios que, de otro modo, quedarían fuera de su jurisdicción. El primer Borbón, en un intento de atajar tales desórdenes, y con el fin de reforzar su autoridad, salvaguardando sus regalías, se negó a dar su *exequatur* o pase regio

das en el Consejo de Aragón. Pero, de nuevo, como sucediera 18 años antes, en 1698, y tras reiterar sus protestas, tuvo que disponer que le fueran entregadas al nuevo prior, José de Salvador, y que se le diese la colación de la prebenda.

No obstante, negándose a aceptar el menosprecio de sus regalías, y antes de que el referido Salvador hiciera efectivas las bulas, escribió al virrey ordenándole que tal posesión no tuviera consecuencia alguna, «y que se reputase como si no la hubiera tomado, quedando preservados e ileos los derechos reales». También escribió al fiscal de la Audiencia para que incoase pleito en el tribunal de la Bailía General sobre el derecho que podía tener el Real Patronato sobre esa dignidad, y lo siguiese hasta que se le diera sentencia definitiva, dándole cuenta de los progresos de la causa.

Pero aunque el litigio fue interpuesto, éste quedó pendiente de sentencia y, con el paso de los años, Salvador no tuvo problema alguno para actuar como prior de la Colegiata.

El asunto fue olvidado hasta que el obispo de Urgel, Simón de Guinda, en una carta fechada el 7 de enero de 1716, informó a Felipe V que había vacado el priorato de San Pedro de Burgal, cuyo derecho de presentación pertenecía al Patronato Real, al igual que el de Santa María de Meyá. El recordatorio sirvió para que el monarca pidiera el dictamen a la Cámara, que en consulta del 27 de enero siguiente, remomendó al rey que escribiese al Capitán General del Principado para que recabara la opinión de la Audiencia sobre la interesante afirmación del obispo de Urgel.

Pero quizá el alboroto postbélico hizo olvidar al Capitán General la petición real pues 20 años después, y sin haber recibido informe alguno, el monarca volvió a escribir a su máximo representante en Cataluña una real cédula, fechada el 24 de octubre de 1736⁷, para que le remitiese el supraescrito informe de la Audiencia, junto con todos los autos concernientes al derecho del Real Patronato sobre el Priorato de la Iglesia Colegial de Santa María de Meyá que pudiese hallar.

Dos años tardó en llegar a la Cámara el informe elaborado por la Audiencia. Pero esta vez, realmente, la espera valió la pena para los intereses de la Corona, pues revitalizó sus intervenciones encaminadas a conseguir la declaración del mencionado priorato para el Regio Patronazgo. Por una parte, el informe demostró que, sin lugar a dudas, era al rey a quien debía tocar la provisión de la citada pieza eclesiástica en tiempo de vacante, por su fundación, dotación y bulas apostólicas y, sobre todo, por ser beneficio consistorial⁸. Y por otra, reveló una irregularidad inadmisibles: que el prior José de Salvador había dado la coadjutoría del priorato a Rafael de Subirá y Portola sin licencia real y, por consiguiente, en claro perjuicio de las regalías de la Corona.

Ambos motivos provocaron la rápida intervención del fiscal de la Cámara, Ventura Güell, quien el 1 de mayo de 1738⁹ expidió una carta para los referidos Salvador

a las bulas de esta naturaleza. De este modo, hasta 1703 se dieron coadjutorías con cierta liberalidad y, desde entonces, sólo de forma extraordinaria. Por otro lado, la Cámara de Castilla también se mostró contraria a la concesión de beneficios a coadjutores, en unos casos por la tibieza o clara desafección del suplicante en la Guerra de Sucesión, en otros —como éste—, por la desatención con los derechos de la Corona.

7. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 261-263.

8. El derecho de presentación de todos los obispados, arzobispados, abadías y demás beneficios consistoriales o mayores de España fue logrado por Carlos I gracias a la bula concedida por Adriano VI el 6 de septiembre de 1523.

9. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 268-268v.

y Subirá, dándoles un plazo de 30 días para que compareciesen en la Cámara para alegar lo que más les conviniese.

No obstante, desobedeciendo las órdenes reales, ni Salvador ni Subirá acudieron a la Cámara de Castilla. Por ello, y a petición del citado fiscal, el 5 de marzo de 1739, Felipe V expidió sendas cartas, a los canónigos del cabildo de la Colegial de Santa María de Meyá¹⁰, *ex una*, y a los jueces del Principado, *ex alia*, comentando en ambas que conocía que el prior, José de Salvador, estaba «*viejo, accidentado y enfermo*»; que, junto a su coadjutor, debía haberse presentado en la Cámara; y que el priorato pertenecía al Real Patronato.

Asimismo, en la primera de ellas, advirtió a los canónigos que, en el caso de que Salvador falleciese, no diesen a Subirá la posesión del priorato, ni le dejaran hacer acto alguno en calidad de prior, sino que nada más ocurrir la vacante, le diesen cuenta de ella «*con la mayor puntualidad*» para que pudiese proceder al nuevo nombramiento.

Y en la segunda¹¹, reclamó a los jueces que ordenaran al coadjutor que presentara sus bulas en la Audiencia, y que las enviaran originales a la Cámara, a manos del secretario real, para proceder a su retención.

Rápido efecto tuvieron las cartas del monarca puesto que, según conocemos gracias a un real despacho fechado el 13 de octubre de 1739 y remitido al Capitán General¹², Subirá, tras representarle el «*sentimiento y desconsuelo*» que le causó la providencia tomada, «*con puntual obediencia*» y «*procediendo con sinceridad y buena fe*» –pero con un año de retraso...–, presentó en la Audiencia las bulas de coadjutoría aduciendo que, por haber creído que era de libre colación apostólica, había tomado posesión quieta y pacíficamente de dicho priorato, jurando solemnemente la obediencia canónica.

Así, los escritos pontificios fueron enviados a la Cámara, donde fueron retenidos. No obstante, cuando todo apuntaba a que Felipe V iba, por fin, a poder proceder al nombramiento del nuevo prior, los capítulos del Concordato «*practicado con la corte de Roma*» en 1737, y en particular, su artículo 23¹³, se lo impidieron. Dicho artículo suspendía cualquier controversia sobre patronato, y permitía al pontífice –o a los respectivos ordinarios en sus meses– la provisión de los beneficios disputados.

Ante tan tajante disposición, poco pudo hacer el monarca en defensa de sus derechos, pese a que intentara mantenerlos intactos afirmando, al devolver las bulas a Subirá, que de cualquier forma quedaría «*siempre a salvo y sin perjuicio alguno la regalía del Real Patronato*». Nada más lejos de la realidad, pues Rafael de Subirá y Portola, de inmediato, pudo tomar legítima posesión de tan debatida prebenda, ocupándola pacíficamente hasta 1773, fecha de su muerte.

10. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 273v-273 (error del secretario de Cámara al paginar).

11. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 276-277.

12. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 281-282.

13. R. García-Villoslada (dir.): *Historia de la Iglesia en España*, t. IV. Apéndice II, p. 802. «Art. 23. Para terminar amigablemente la controversia de los patronatos de la misma manera que se han terminado las otras, como Su Santidad desea, después que se haya puesto en ejecución el presente ajustamiento, se deputerán personas por Su Santidad y por Su Majestad para reconocer las razones que asisten a ambas partes; y, entretanto, se suspenderá en España pasar adelante en este asunto; y los beneficios vacantes o que vacaren sobre que pueda recaer la disputa del patronato, se deberán proveer por Su Santidad o en sus meses por los respectivos ordinarios, sin impedir la posesión a los provistos».

Su fallecimiento reactivó, después de 34 años, el interés real por capturar entre las redes de su Patronato el priorato regular de Santa María de Meyá. Dicho interés chocó con el del abad del monasterio de Santa María de Ripoll, José de Oriol, quien consideraba tener derecho a proceder al nombramiento del nuevo prior, por haber muerto el último poseedor de tal dignidad en mes ordinario, esto es, uno de los cuatro que tenía reservados.

No se pusieron de acuerdo las partes —el fiscal de la Cámara de Castilla y los presbíteros Antonio Font, Francisco Pascual y Joaquín Serra, canónigos de la Colegiata, por un lado; y el citado abad, por otro—, por lo que el pleito, al guardar relación con el Real Patronato, fue abocado a la Cámara de Castilla.

Los argumentos de ambas partes eran claramente contrapuestos. Mientras los primeros pretendían que el priorato era «*de la privativa real provisión en todo tiempo y vacante*» por ser la iglesia colegial y, por tanto, consistorial; el abad de Ripoll defendía que la iglesia era conventual, prioral o parroquial, por lo que la nominación y provisión del priorato —al igual que la de las demás dignidades— tocaba a los abades del expresado monasterio en las vacantes que ocurriesen en los cuatro meses ordinarios, y únicamente al rey en los ocho meses apostólicos; y reforzando su postura, señalaba además, que la referida iglesia, desde su origen hasta la concesión de los privilegios e indultos apostólicos en favor de la Corona, jamás había sido considerada consistorial, «*ni menos tenga cualidad alguna por la cual pueda estimarse del real patronato*».

No obstante, Carlos III, manifestando su voluntad de respetar la sentencia de la lite, y tras justificarse aduciendo que la nominación le concernía por los antiguos derechos de la Corona y por los nuevos conseguidos de la Santa Sede tras el Concordato de 1753, nombró prior a Manuel Abad y Lasierra el 1 de julio de 1773¹⁴.

Pocos días después, el 20 de julio, para que el litigio discurriese dentro de los cauces de la más respetuosa legalidad, el monarca envió al regente de la Audiencia de Barcelona tres despachos. En el primero de ellos le pedía que procediera a cotejar, comprobar y compulsar los documentos presentados como pruebas en la Cámara por el abad de Ripoll¹⁵. En el segundo, le solicitaba que realizase la misma operación con los testimonios de los tres canónigos de la Colegiata¹⁶. Y en el tercero, le demandaba que, en respuesta a una petición de los ayuntamientos de las villas de Villanueva, Figuerola y Santa María de Meyá, les remitiera la copia de los autos del pleito para que, en su vista, pudiesen decir y alegar lo correspondiente a sus derechos y a los del Real Patronato¹⁷.

Estando a la espera de las bulas pontificias, el monarca encargó al Capitán General, por medio de una real cédula fechada el 31 de agosto siguiente, que con intervención o anuencia de Abad y Lasierra, nombrara secuestrador y ecónomo de dicho

14. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 186-187.

15. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 191v-192. Las pruebas del abad parecían sólidas. Entre los documentos que presentó destacaba una copia certificada en la que Clemente May, *tunc* abad del monasterio, nombraba prior de la Colegiata a Narciso Amalrich —monje de dicho monasterio— el 27 de septiembre de 1575.

16. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 192-193v.

17. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 189-191.

priorato¹⁸. Y como al tiempo de avisar a la Cámara de la vacante, el presidente de la Congregación Benedictina Claustral Tarraconense Caesaraugustana había nombrado de modo interino y sin ánimo de perjudicar las regalías, a Mariano de Rivas –monje y sacristán del Monasterio de Santa María de Gerri–, el rey ordenó que el citado economo entregara al nombrado por el Capitán General y la Audiencia los frutos y rentas caídos desde la mencionada vacante.

La llegada –no sin cierto retraso– de las bulas constituyó para la Corona, si no un éxito rotundo, sí un gran paso en aras de lograr la declaración del priorato como perteneciente al Real Patronato. Era la primera vez que un monarca podía proceder al nombramiento del prior de la Colegiata de Santa María de Meyá.

Tras la acostumbrada revisión de las bulas por el fiscal de la Cámara, y sin que éste hallase en ellas contravención alguna, el 1 de febrero de 1774 se le expidió a Manuel Abad y Lasierra el ejecutorial necesario para que pudiera tomar posesión de su prebenda¹⁹.

El pleito entre el fiscal de la Cámara y el abad de Ripoll aún continuaba sin resolverse en 1783, año en que vacó el priorato de la Colegiata de Santa María de Meyá por la promoción de Abad y Lasierra al recién erigido obispado de Ibiza²⁰.

Entonces, la Corona volvió a sacar a la luz sus antiguos derechos y los nuevos conseguidos a raíz del último Concordato, y el 7 de octubre de 1784 procedió al nombramiento de Francisco Llovet y Mas –limosnero del monasterio de Santa María de Gerri–, no sin manifestar idéntica prevención que cuando designó a Abad y Lasierra: la presentación no iría en perjuicio de la resolución del pleito pendiente en la Cámara²¹. Tras ser presentado el nombramiento ante el papa por el duque de Grimaldi, Llovet obtuvo las bulas «*como se acostumbra en los Beneficios Consistoriales*». Y después de ser examinadas en la Cámara, el rey le concedió el ejecutorial el 17 de marzo de 1785²².

En conclusión, la evolución de este caso nos permite conocer los afanes reales, regalistas, por defender los derechos de patronato de la Corona –o por adquirir nuevos–, así como la influencia de los concordatos en materia de provisiones, pues el rey no consiguió nombrar prior en una pieza eclesiástica sobre la que cabían serias dudas acerca de su pertenencia al Real Patronato o de la licitud de su derecho de presentación –por su pretendida consistorialidad–, hasta que halló la pertinente legitimación en «*los derechos conseguidos de la Santa Sede*» tras el Concordato de 1753, aunque en ese momento no dejó de manifestar los antiguos derechos de la Corona sobre tal prebenda.

18. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 200v-202v.

19. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 206.

20. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 327v-333.

21. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 347-347v.

22. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 241v, 337, 353. Por otra parte, el Patronato Real alcanzó la presentación de dos beneficios del Priorato. Por un lado, el 11 de mayo de 1777 se dio despacho a Sebastián Frallero para la rectoría de la Parroquial de Santa María de Palau. Y por otro, el 7 de febrero de 1784, Antonio Olives obtuvo el título para la vicaría de la Parroquial de San Julián de Clua, que había vacado por la promoción de Antonio Bagils a la conectoría de la de San Salvador de Villanueva de Meyá –también en el territorio del Priorato–.

Otro caso destacable en este apartado sobre los pleitos reales orientados a la extensión del Real Patronato es el del priorato de San Pedro de Burgal, cuyo origen está relacionado con el de la Colegiata de Santa María de Meyá y cuyo transcurso sigue similares directrices que el anterior.

Como ya indicamos, el 7 de enero de 1716, el obispo de Urgel, Simón de Guinda, escribió a Felipe V para darle noticia de la vacante del priorato de la Iglesia de San Pedro de Burgal, llamado comúnmente de Escaló, que al igual que la Colegiata de Meyá, pertenecía al Real Patronato por ser beneficio consistorial.

En atención a tal advertencia, 20 días después, la Cámara —a instancia del fiscal— solicitó a la Audiencia que indagara sobre el presunto derecho real de presentación.

Pero la respuesta del tribunal catalán no llegó. Tras más de 20 años, Felipe V insistió en la cuestión y el 24 de octubre de 1736²³ escribió al Capitán General para que, en su nombre, le reclamara a la Audiencia el informe sobre el priorato.

Los datos llegaron a la Cámara a principios de 1738, y revelaron que, en efecto, la referida pieza eclesiástica pertenecía al Real Patronato, por «*indulto apostólico y leyes de estos reinos*»²⁴, por haber sido monasterio conventual y convenirle todas las reglas de consistorialidad. Y hallándose en ella «*intrusado*» Juan Bautista Malet, la Cámara aconsejó al rey que se le enviara cédula de emplazamiento para que acudiera a ella en el término de 30 días a partir del día en que se efectuara la notificación. El rey ordenó que así se procediera despachando la real cédula del 1 de mayo de 1738²⁵.

No poseemos dato alguno sobre la comparecencia o no del prior Malet, pero sí podemos afirmar que las anteriormente señaladas disposiciones del Concordato de 1737, solucionando cualquier controversia sobre patronato en favor de la Santa Sede, sirvieron para que Juan Bautista Malet consiguiese mantenerse al frente del priorato de Escaló hasta la fecha de su muerte, que debió acaecer a finales de 1769 o principios de 1770.

El fallecimiento de Malet desató las discordias entre el abad del monasterio de Santa María de Gerri y el obispo de Urgel, quienes al no querer llegar a un acuerdo extrajudicial, se vieron obligados a dirimir sus diferencias sobre territorio, jurisdicción, naturaleza y provisión del priorato en la Cámara.

Carlos III requirió un dictamen inicial a la Cámara que, en consulta pasada el 10 de febrero de 1770, recomendó al monarca que ordenase a las partes que acudiesen al referido tribunal a exponer lo que más les conviniese en defensa de sus derechos.

El rey aceptó la recomendación y les envió sendas letras de citación. Y además, entretanto se hallaba solución a la lite —y sin perjuicio de lo que en ella se decidiese—, aprovechó la ocasión para ser él quien nombrara al sucesor del prior fallecido. La

23. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 261-263.

24. El «*indulto apostólico*» hace referencia a la ya mencionada bula de Adriano VI. Las «*leyes de estos reinos*» hacen referencia, principalmente, a la ley IV, del título XVII, del libro I, de la Novísima Recopilación: «*Patronato Real de todas las Iglesias catedrales de estos reynos, y presentacion de sus Prelacias y Abadías consistoriales. Por Derecho y antigua costumbre, y justos títulos, y concesiones Apostólicas somos Patron de todas las Iglesias catedrales de estos reynos, y nos pertenece la presentacion de los Arzobispados y Obispados, y Prelacias y Abadías consistoriales de estos reynos, aunque vaquen en corte de Roma*».

25. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 261-263.

elección recayó en la persona de José Nuet, que antes de obtener el correspondiente despacho de presentación para el prelado urgelitano, hubo de aceptar una serie de condiciones:

– El provisto habría de comparecer ante el obispo de Urgel para realizar el examen *ad curam animarum*, para asegurar de este modo su idoneidad.

– Tendría que residir en la villa de Escaló.

– Debería encargarse personalmente de desempeñar las obligaciones de la cura de almas.

– Y, por último, tendría que mantener los vicarios o tenientes que el obispo de Urgel estimare necesarios para el servicio exacto del «*Pasto Espiritual*», teniendo en cuenta la población y las rentas del priorato.

El 22 de marzo siguiente les fueron comunicadas las letras citatorias tanto al abad como al obispo. Y en su cumplimiento, el mitrado –por medio de su procurador Antonio Sánchez Buitrago– presentó en la Cámara una representación fechada el 18 de agosto de ese mismo año, en la que expuso cuanto creyó conveniente para no ver menoscabada su dignidad episcopal. Por su parte, el abad y cabildo de monjes del monasterio de Gerri enviaron a la Cámara a su procurador legítimo –José Antonio Sanz– para que defendiese sus derechos sobre el priorato.

También compareció ante la Cámara el nuevo prior, José Nuet, quien, aportando dos certificados médicos, alegó que era muy perjudicial para su salud la obligada residencia en la villa de Escaló, por el excesivo frío que en ella hacía, por lo que pidió real licencia para asistir a dicho priorato únicamente los meses de junio, julio y agosto, y vivir el resto del año en un lugar más templado y cómodo para su salud, dejando provisto suficientemente el pasto espiritual de los feligreses, durante su ausencia, con uno o varios vicarios que lo administraran; o bien que le concediera el real permiso para poder recurrir a la Santa Sede, o al obispo de Urgel como más inmediato, para que le dispensasen de la dudosa residencia de su priorato, dejando uno o más tenientes para la administración de la cura de almas y demás ejercicios parroquiales.

Estando concluido el expediente, se señaló día para su vista, siendo emplazadas las partes para que asistieran a la lectura del veredicto de la Cámara. Allí, por decreto de 1 de julio de 1772, se resolvió:

– Que el priorato debía estar sujeto en lo espiritual a la autoridad del abad del monasterio de Santa María de Gerri, en cuyo abadiato se hallaba comprendido.

– Que era un beneficio secular, por lo que los priores siempre tendrían que ser clérigos seculares.

– Que era residencial, esto es, el prior habría de residir obligatoriamente en la villa de Escaló.

– Y que, como beneficio curado, debería ser conferido por concurso. De este modo, se estableció que, en adelante, sería el rey quien nombrase al prior en las vacantes que aconteciesen «*en los ocho meses y casos de las reservas especiales y generales*», eligiendo al candidato que considerase más digno de un terna que debería componer el abad de Gerri, para que en último lugar fuera éste, como ordinario de aquel territorio, quien hiciera la colación de la prebenda.

Además, hay que destacar que el monarca, atento a las necesidades espirituales de sus súbditos, en real cédula del 24 de septiembre de 1772²⁶, advirtió al referido abad que en el caso de que considerase necesaria, para ayudar a la cura de almas, la creación de una vicaría perpetua, colativa, residencial, a proveer por concurso y terna, que procediese a decretar su erección, asignándole como congrua parte de las rentas del priorato, dando cuenta de todo ello a la Cámara.

Siguiendo las recomendaciones reales, el 22 de abril de 1773, el abad formalizó el decreto de creación de una vicaría perpetua en la iglesia de Santa Elena del lugar de Escaló, y lo remitió original a la Cámara para que el monarca diese su aprobación.

Tras ser reconocida la utilidad del proyecto, la Cámara emitió su dictamen en consulta del 30 de agosto siguiente, y por resolución a dicha consulta, y como patrono universal y protector de la disciplina de las Iglesias de sus dominios, Carlos III prestó su consentimiento al decreto de erección de la vicaría, y mandó que, cuanto antes, fuera devuelto para que se procediera a su publicación y ejecución, con la calidad de que lo prevenido en el mismo no se pudiera variar ni alterar sin que intervinieran justas causas, haciéndolas antes presentes al rey, y con su consentimiento.

Por todo ello, en real cédula dada el 3 de octubre de ese mismo año²⁷, ordenó a las autoridades seculares y eclesiásticas que dieran auxilio en la erección de la vicaría.

Volvemos, pues, a apreciar las dificultades opuestas al rey de cara a la extensión de su patronato por el texto del Concordato de 1737. En este caso, al contrario de lo ocurrido con el priorato de Meyá, no consiguió el monarca más que la presentación «en los ocho meses y casos de las reservas especiales y generales». Asimismo, se observa la conciencia que tenía Carlos III de ser el «patrón universal y protector de la disciplina de las Iglesias de sus dominios» al preocuparse por cubrir las necesidades pastorales de dicho priorato con la erección de la vicaría perpetua colativa residencial.

No obstante, la defensa más acérrima del Real Patronato la hallamos en una intervención de Carlos III contra el abad del monasterio de San Cugat del Vallés, perteneciente a la Congregación Benedictina Claustral.

El 27 de abril de 1772, el fiscal de la Cámara informó al rey que el mencionado abad había obtenido de la Congregación de Obispos y Regulares unas letras no sólo ofensivas para la autoridad de dicho Supremo Tribunal, sino también perjudiciales a las regalías de la Corona por la pertenencia de la abadía de dicho monasterio al Real Patronato. Y por ello, le pidió que escribiese a la Audiencia de Barcelona con la intención de que en ella se practicasen las diligencias necesarias para que, bajo pena de 200 ducados, el abad entregara dichas letras o, al menos, declarara su paradero, y acto seguido, fueran remitidas a la Cámara.

Y el rey, considerando muy urgentes las indicaciones del fiscal, el 9 de mayo de ese mismo año²⁸ ordenó la expedición de un despacho al regente de la Audiencia para que procediese a la recogida y envío de tan gravosos documentos.

26. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 168v-171.

27. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 202v-203v.

28. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 166-167.

Observamos, pues, cómo el monarca, nada más conocer la existencia de esas letras lesivas a sus intereses, las reclamó y dispuso que fueran remitidas a la Cámara para someterlas a un estudio y proceder en contra de sus autores.

Como ya hemos podido comprobar en el caso del priorato de San Pedro de Burgal, no siempre triunfaban los intereses del rey. El ejemplo más claro de victoria legal de la otra parte es el que benefició a Bonifacio Ferrer el 21 de octubre de 1753²⁹.

Éste fue provisto por Su Santidad en el beneficio de Santa María, fundado en la capilla del Castillo de Alós, sito en la diócesis de Urgel. Al pertenecer dicho beneficio al Real Patronato según la opinión del fiscal de la Audiencia, se entabló en ésta pleito en primera instancia. La Cámara, al conocer la existencia de este expediente, en el que Ferrer pretendía la validación de su bula de nombramiento y de la toma de posesión del beneficio, actuó enérgicamente: los frutos de la prebenda fueron inmediatamente secuestrados, por decreto del 10 de abril de 1752, y se suspendió la prosecución del pleito hasta nueva orden.

Pero la apelación del afectado tuvo efectos poco frecuentes. Fernando VI, por decreto de 10 de octubre de 1753, respetó la provisión pontificia ordenando el levantamiento del secuestro y la entrega de los frutos secuestrados a Bonifacio Ferrer, así como que no se le «*embarazara*» la posesión del beneficio. Y para su puntual cumplimiento escribió a las autoridades seculares de Cataluña. Asimismo, envió real despacho al obispo de Urgel para que dispusiera el cobro de los «*sufragios y demás cargas*» anexas al beneficio desde el momento del secuestro.

Un documento trasapelado –del 3 de diciembre de 1775– que debería hallarse en los libros de registro de Aragón, nos permite conocer otro enfoque de la defensa del Real Patronato por los monarcas³⁰. La intervención de Carlos III tiene como fin que se respeten los derechos y atribuciones de los monasterios de la Congregación Benedictina Claustral Tarraconense Caesaraugustana, particularmente los de San Juan de la Peña, sobre la colación de beneficios tras concurso y oposición dirigida por el propio monasterio, donatario de la Corona.

Resumiendo en extremo, el pleito enfrentó al abad de dicho establecimiento y al vicario de la Parroquial de Santa Celia –José Salvador de Otamendi y Les–, por una parte, y por la otra al provisor y vicario general de la diócesis de Jaca, el doctor Benito de Gallego. El expediente nació a raíz de la publicación por el abad del edicto de concurso de la vicaría de Santa Celia –vacante por resigna en sus manos de José Salvador–, pues poco tiempo antes Gallego le había informado que no podía habilitar concursos para los curatos de los que era colador. Contra el abad por hacer caso omiso a su admonición³¹; y contra el vicario por resignar ilícitamente. El provisor amenazó a este último con la excomunión y la confiscación de sus bienes, para que volviese

29. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 307v-309v. A. Carrasco Rodríguez: «El Patronato Real en Cataluña (1715-1775)», en *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, 13-14 (1995), p. 104.

30. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 223v-226.

31. El abad convocó concurso y oposición en el plazo de 15 días. El examen tuvo lugar en el monasterio con los examinadores por él nombrados, en virtud de rescripto apostólico. El rey era parte afectada porque cualquier presentación hecha por el monasterio requería su aprobación. Tras concurso y terna, el rey aprobó el nombramiento de Antonio Sarasa.

a la vicaría en el término de seis días –se hallaba en la villa de Bolea, en la diócesis de Huesca–, y resignase legalmente, requisito necesario para proceder a una nueva provisión de la pieza eclesiástica. Salvador se negó y fue excomulgado, por lo que recurrió ante la Audiencia de Aragón, y buscó la real protección. El rey pidió el envío de los autos originales de los procesos y tras observarlos, decidió que Gallego sobreyese los procedimientos, levantase la excomunión y devolviese los bienes a Salvador; que mantuviese la facultad abacial de convocar concursos para la colación de los curatos vacantes; y que, además, corriese con los gastos de las apelaciones.

2. LOS TRIBUNALES CON JURISDICCIÓN SOBRE LAS CAUSAS DEL REAL PATRONATO: LA AUDIENCIA DE CATALUÑA Y LA CÁMARA DE CASTILLA

Otro grupo de documentos hace referencia a la exclusividad de la Audiencia del Principado a la hora de «sustanciar y determinar» los expedientes relacionados con el Patronato Real, en primera instancia, yendo las apelaciones dirigidas a la Cámara. La ley XVII, del título XVII, del libro I de la *Novísima Recopilación*, dada por Fernando VI en Buen Retiro por real decreto de 3 de octubre de 1748, y referente a las «reglas para el conocimiento de las causas del Real Patronato» aclara esta normativa:

«(...) deseando dar oportuno remedio que asegure la más pronta administración de justicia, mando, que las Chancillerías y Audiencias respectivas conozcan y determinen en primera instancia, con las apelaciones á la Cámara, todas las causas y negocios en que, no dudándose de mi útil efectivo patronato, solo se controvierta sobre las dotaciones, rentas, derechos y preeminencias tocantes a las Iglesias y piezas de mi real presentación; á cuyo fin se darán por el Consejo de la Cámara las órdenes convenientes, con las que cesen todos los Jueces subdelegados en estas particulares comisiones, y remitan lo pendiente en su asunto á los expresados tribunales (...)».

Mostraremos por orden cronológico las intervenciones reales para la designación del tribunal competente correcto –la Cámara– en los asuntos tocantes al Regio Patronazgo.

La primera de ellas tuvo lugar a finales de 1737, cuando el 15 de diciembre Felipe V escribió al Capitán General y a la Audiencia para que, en atención al real decreto del 16 de noviembre anterior, prosiguiese en ésta el conocimiento del secular e interminable pleito³² entre las dignidades del Real Patronato, y el cabildo de la Catedral de Solsona³³, determinándolo en el término de cuatro meses y otorgando las apelaciones que se interpusieren a la Cámara³⁴. Con posterioridad, el 22 de abril de 1738, el rey recibió una información difusa sobre los progresos del pleito, por lo que dictaminó de nuevo el 11 de julio que la Audiencia continuase en el conocimiento del mencionado pleito, recalcando: «y en el de todos los demás que correspondan al Real Patronato»³⁵.

32. El pleito surgió con motivo de las sucesivas vacantes y provisiones de la canonjía penitenciaria, pues los doce canónigos del cabildo no admitieron los votos de las cuatro dignidades de patronato real –deán, arcediano, arcipreste y tesorero–, que desde la fundación del cabildo siempre habían gozado de voto en los actos capitulares.

33. Los canónigos del cabildo catedralicio defendían que el juez competente debía ser el ordinario eclesiástico de Solsona.

34. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 263v-265.

35. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 270v.

Poco después, el 1 de agosto ³⁶, Felipe V escribió a Antonio de Ameller y de Montaner, abad del monasterio de San Pedro de Besalú, en su calidad de presidente de la Congregación Benedictina Claustral Tarraconense Caesaraugustana, para comunicarle el contenido de la referida real cédula del 11 de julio, con la intención de que diera noticia de ella a todos los abades y monasterios de su congregación.

También dirigió carta al Capitán General y al regente de la Audiencia del Principado con el mismo fin el 2 de febrero de 1740³⁷. En ella, además, les mandaba que siguiera la Audiencia en el conocimiento de los pleitos que mantenía el abad de Ripoll contra el obispo de Vic³⁸, y contra el procurador fiscal de la Curia eclesiástica de Solsona³⁹, y el abad de Besalú contra el obispo de Gerona⁴⁰; y que entendiera en todos los demás que recayesen sobre derechos, dotes y prerrogativas de los abades y monasterios de dicha congregación, sin consentir que se acudiera a otros tribunales, ni que estas causas se siguieran en la Curia romana, «*mediante el recogimiento y detención (por la Cámara) de los despachos que a este fin se expedieren*».

Amparándose en las dos reales cédulas citadas –11 de julio de 1738 y 2 de febrero de 1740–, el abad de Gerri, Francisco de Miranda y Testa, intentó «*algunas novedades en razón de rentas e intereses de las mensas*» en perjuicio del cabildo de dicho monasterio, y separándose de la subordinación a la potestad y jurisdicción de la Presidencia de la Congregación. Ello hizo que el cabildo acudiera al Tribunal de la Presidencia, entablado tres pleitos contra dicho abad⁴¹.

En la Audiencia, el abad halló el apoyo del fiscal. Gracias a él, consiguió que se le ordenara al presidente de la Congregación que se abstuviese del conocimiento de los mencionados pleitos y de informar al Banco-Regio⁴².

El cabildo elevó al rey una representación suplicándole que se dignase aclarar si su intención al publicar las reales cédulas citadas era que la Audiencia conociese en primera instancia los pleitos activos y pasivos que los monasterios de la Congregación tuvieran con personas o comunidades fuera de ella, o si pretendía «*que se innovara en el ejercicio de la potestad y jurisdicción que han tenido los presidentes, visitantes, definitorio, capítulo general y abades de esta congregación sobre sus súbditos*»

36. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 271.

37. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 284-287.

38. En representación de diferentes iglesias parroquiales, sobre la jurisdicción espiritual *in clerum et populum*, y el territorio separado dentro de la Parroquia de Ripoll.

39. Sobre la provisión de la Parroquia de San Cugat.

40. Sobre la posesión de la sacristía de Batet.

41. Uno para que los monjes del monasterio mantuvieran su condición privilegiada, que fue arreglado mediante concordia con el abad; otro para que siguieran administrando el Archivo y Teca común de la mensa monasterial el prior y dos monjes, sin intervención del abad; y un tercero, para que se declarara pertenecer a la mensa monasterial, y no al abad, el priorato de San Pedro de las Malesas, unido al monasterio.

42. En el reino de Aragón, los litigios entre la jurisdicción eclesiástica y la secular se resolvían en Banco-Regio, lugar donde los representantes de las partes contendientes se reunían para concordar; pero el acuerdo se demoraba indefinidamente y los litigantes no lograban alcanzar justicia. En M^{ra}. Luisa Vicente García: «Institucionalización y ocaso del Canciller de Competencias en el Reino de Aragón» en *Estudios* 1980-1981, Zaragoza, 1981, pp. 89-90.

en primera instancia y con reserva de las apelaciones en los casos que hubiera lugar al Consejo de la Cámara».

Vista la representación en la Cámara, y oído lo expuesto por el fiscal, el rey declaró el 8 de febrero de 1746 que el conocimiento y jurisdicción de la Audiencia en primera instancia debía entenderse no sólo en las causas que enfrentaran a los pertenecientes a dicha congregación con personas o comunidades fuera de ella, sino también en todos los negocios que entre ellos mismos se suscitasen, tanto sobre la pertenencia de bienes y derechos tocantes a su dotación como sobre preeminencias, regalías, honores y otros puntos en que se tratara directa o indirectamente de perjudicar al Real Patronato. Y que el conocimiento de todas aquellas causas meramente personales entre religiosos y abades, y de las relativas a la observancia del «*Instituto Monástico y sus Constituciones*» o a cuestiones espirituales, no correspondía a la Real Audiencia, sino a los abades de los monasterios y al presidente de la Congregación.

Y tras aclarar los límites jurídicos de sus dos reales cédulas, el rey escribió al Gobernador y a la Audiencia para que se procediera en los casos convenientes del modo mencionado. Y respecto a los tres pleitos expresados contra el abad de Gerri, les comunicó que debían administrar justicia⁴³.

La última intervención real para llevar un asunto tocante al Real Patronato a la Audiencia tuvo lugar en ese mismo año de 1746⁴⁴. Aconteció a raíz de un pedimento elevado al monarca por el abad y monjes del monasterio de San Benito de Bagés, en el que se expresaba la pertenencia a dicha comunidad de la villa de San Pedro de Oro, junto con el patronato del curato de San Pador –sito en dicha villa–⁴⁵, «*en virtud de reales donaciones de los señores Guillermo, Berengario y Raimundo, condes de Barcelona*». En fuerza de tan legítimos títulos, dicho patronato no fue discutido nunca hasta que el presbítero Francisco Panadés, sin licencia ni permiso del monasterio, y en desprecio de sus regalías, tomó posesión del beneficio, renunciando en manos de Su Santidad y despachándose la bula de gracia a favor del doctor Ignacio Bovés. Gracias a ella, el resignado tomó posesión del curato. Ello propició la demanda del monasterio, por considerar «*nula, violenta y atentatoria dicha posesión como vulneración de la regalías de la Corona*». Además, puesto que las resignas o permutas sin licencia, aun de los beneficios de patronato particular, estaban completamente prohibidas, recomendaba que el juez realengo más cercano recogiera la citada bula y la remitiera a la Cámara, y que los frutos del curato fueran secuestrados y embargados, emplazando a resignante y a resignado ante dicho Consejo para que presentasen su defensa.

Vista la petición en la Cámara, por decreto de 30 de abril de 1746, el rey ordenó, mediante despacho del 12 de mayo siguiente dirigido al Capitán General, que la bula fuera recogida, junto con las diligencias originales que para su posesión se practicaron, y que fuera remitida a dicho consejo, emplazando a las partes a la Audiencia para deducir sus derechos en primera instancia y apelando a la Cámara si fuese necesario.

43. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 54-57v.

44. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 67-70v.

45. Tradicionalmente, ante las vacantes, los obispos de Vic sacaban a concurso el beneficio curado de ella, y enviaban la lista de aprobados al abad, reconociéndolo como patrono, para que eligiese y nombrase al que le pareciese (como ocurrió el 3 de julio de 1631, cuando el abad nombró a Pedro Porrassa o el 3 de enero de 1688, cuando nombró a Tomás Carrera).

Posteriormente, el 9 de agosto de 1748⁴⁶ volvió a escribirle para informarle que Ignacio Bovés había acudido al provisor y vicario general del obispado de Vic, suponiendo que era caso de su competencia en virtud de la «*Concordia de la Santa Reina Leonor y el cardenal Comense*»⁴⁷. Y por estar los tribunales del Principado inhibidos del conocimiento de las causas del Real Patronato, le ordenó, en atención al real decreto de 31 de julio, que proveyera lo conveniente para que ni el Juez Ordinario Eclesiástico del Obispado de Vic, ni ningún otro embarazara a la Audiencia el conocimiento de dicha causa, y que emplazara a la parte del monasterio para proseguir su instancia contra los detentadores ilegales de la mencionada prebenda.

No obstante, las órdenes reales en torno a la determinación de las causas del Real Patronato no fueron bien vistas por todos los pleiteantes. Si bien la designación de la Audiencia como tribunal competente era aceptada de modo generalizado, los fuertes desembolsos necesarios para poder sobrellevar las apelaciones en la Cámara podían alejar de los juicios a las partes insatisfechas tras las sentencias en primera instancia. El caso más sangrante es el de los domeros y comunidad de presbíteros de la Iglesia de San Pedro de la villa de Ripoll.

Éstos se enfrentaban al abad del monasterio de Santa María de Ripoll porque admitía libremente en dicha iglesia a presbíteros no naturales de la mencionada villa.

Tras no quedar de acuerdo con la sentencia de la Audiencia de Barcelona, apelaron a la Cámara. Ésta requirió al referido tribunal del Principado el envío de los autos del pleito. Así se procedió. Pero los domeros protestaron por creer viciados y sospechosos los instrumentos remitidos, por lo que demandaron que se enviaran de nuevo los autos.

Carlos III accedió a la petición, por lo que, por real despacho de 14 de agosto de 1763, ordenó a la Audiencia que los enviarán, pero corriendo las costas a cargo de los apelantes⁴⁸.

No habiendo aún recibido la Cámara dichos autos a inicios de 1766, el rey, en virtud del decreto de 26 de febrero de ese año, expidió real cédula fechada el 6 de marzo para que las autoridades competentes hicieran saber a los domeros y presbíteros de la comunidad de la Parroquial de San Pedro que si dos meses después de hecha la notificación no hacían presentes dichos instrumentos en la Cámara, la apelación se declararía desierta⁴⁹.

Los domeros informaron a la Cámara que por ser tan costosa la compulsa y el transporte —«*que debe realizarlo uno de los porteros bien asalariados*»— de autos tan voluminosos, y por los crecidos gastos seguidos de la instancia de apelación, se veían obligados tristemente a abandonar su derecho a apelar, pese a los gravísimos perjuicios derivados de la sentencia, a menos que «*la bondad real*» no diese comisión a la

46. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 134-135.

47. En los reinos de la Corona de Aragón, excepto en el reino del mismo nombre, para solucionar los conflictos de competencias jurisdiccionales se seguía el procedimiento estipulado en dicha Concordia. Se firmó en 1372, entre D^a Leonor, esposa de Pedro IV el Ceremonioso, y el cardenal Bertrando de Comenges. Fue confirmada posteriormente por Pío V y por Gregorio XIII. En M^a. Luisa Vicente García, *op. cit.*, p. 89.

48. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 109v.

49. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 122-124.

Audiencia para el conocimiento de dicha apelación durante el año y medio siguientes, período en el que se mantendría al abad en tan «*penosa*» facultad de admitir en su comunidad a presbíteros no naturales de la villa de Ripoll.

Tras ser escuchados por la Cámara, con los antecedentes del asunto y lo expuesto por el fiscal, y habiendo cumplido el término señalado para la remisión de los autos, por decreto del primero de noviembre de 1766, se declaró desierta la apelación, pasando «*en autoridad de cosa juzgada el auto definitivo de la Audiencia de 12 de agosto de 1762*».

Y para informar de la resolución a ambas partes se expidieron sendas reales cédulas con fecha de 20 de noviembre de 1766⁵⁰.

3. INTERVENCIONES REALES EN CAUSAS DE PATRONATO DE PARTICULARES

También era competencia del monarca –como patrón de la Iglesia nacional– determinar las causas que afectaban al patronato de particulares. Contamos con dos casos de este tipo.

El primero de ellos es el que enfrentó al abad del monasterio de San Pedro de Camprodón, con Ignacio Aulí, sobre la validación o nulidad de una bula apostólica obtenida por éste para realizar una permuta⁵¹.

Dicha permuta entre el mencionado Aulí y Francisco de Torres se llevó a cabo, intercambiándose el beneficio diaconil personal fundado por el primero en la Iglesia Mayor de Gerona por el que tenía el segundo en la Iglesia de Santa María de la villa de Camprodón.

Seguidamente, el 14 de octubre de 1751, con motivo de haberse ejecutado dicha permuta sin licencia real y por haber sido despreciado su alegato por el oficial y vicario general del obispado de Gerona –que había obtenido comisión por la realización de la operación–, el abad de Camprodón acudió a la Audiencia de Barcelona, que despachó provisión para recoger las bulas apostólicas de permuta y comisión, lo que se ejecutó. Y el 21 de febrero de 1752 ordenó el secuestro de los «*frutos y emolumentos*» del beneficio diaconil hasta nueva orden «*de un legítimo superior*», y remitió los autos de aprehensión a la Cámara.

Atendiendo a las reales cédulas de 16 de diciembre de 1749 y 17 de abril de 1750 que mandaban que no se admitiesen bulas ni rescriptos de Roma en lo respectivo a beneficios sobre cuyo patronato hubiese pleitos pendientes en las Audiencias, y por depender este pleito del proceso universal que le enfrentaba con el obispo de Gerona, Lorenzo de Taranco, y el clero de la villa de Camprodón sobre prerrogativas, patronatos y otros derechos pertenecientes a su dignidad, el abad pidió a Fernando VI –el 14 de octubre– que se anulase el pleito y la permuta, o que, al menos, se retuviese la bula para que ésta no tuviera ningún efecto práctico.

Tras serle dado a conocer este alegato, Ignacio Aulí pidió el 8 de noviembre de 1752 que se declarase no haber lugar a la retención pedida por el abad, que se le devolviera la bula de permuta con todos los demás papeles que se le recogieron, y que

50. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 127v-130v.

51. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 300-304v.

se alzase el secuestro de los frutos para que, tras el despacho de la cédula conveniente, se le devolvieran íntegros y sin desfaldo alguno. Junto al pedimento presentó tres instrumentos para demostrar que el beneficio permutado no era del Patronato Real⁵².

De todo ello se le «*dio traslado a la parte del abad*», quien el 27 de enero de 1753 volvió a dirigirse a Fernando VI para reproducir lo pedido el 14 de octubre y alegar nuevas razones contradiciendo los instrumentos presentados por la otra parte.

Se pasó el nuevo pedimento a Aulí, pero en su vista no se le ofreció añadir nada más, afirmándose en lo dicho.

Vistos por el fiscal los autos, concluyó alegando a favor del Real Patronato. Pero la Cámara dictaminó en su contra, y por decreto del 6 de junio de 1753 se declaró no haber lugar a la retención demandada, con las consiguientes órdenes de reintegro de la bula de permuta –junto con todas las demás diligencias– y alzamiento del secuestro con entrega de los frutos íntegros; órdenes que se debían ejecutar «*sin embargo de suplicación*».

Por ello, Fernando VI, por real despacho del 28 del mismo mes, pidió al obispo de Gerona que tomara las providencias necesarias para el completo y puntual cumplimiento del decreto.

Como vemos, las buenas pruebas presentadas por Aulí impidieron la extensión del Real Patronato, reafirmando su patronato particular. El rey, como patrón de la Iglesia nacional, anteponía la justicia a sus propios intereses.

El segundo caso de intervención del monarca en un pleito referente a piezas eclesiásticas ajenas al Patronato Real resulta especialmente interesante, pues en él juega un papel importante la Santa Sede. En pocas palabras, podría decirse que Carlos III da consistencia al blindaje del patronato de un beneficio que podría en cualquier momento enredarse en la tela de araña de las reservas pontificias⁵³.

Tras el fallecimiento de Domingo Planas, al quedar vacante el beneficio de Santa Cruz en la Iglesia Colegial de San Feliu de Gerona, se abrió este pleito en la Cámara con la intención de declarar a quién tocaba legítimamente el derecho de presentación.

El abad y cabildo de la Colegial demostraron al rey con varios documentos que el beneficio era de patronato de legos, y que en esta calidad les dejó la presentación su fundador, «*con tan varias y estrechas condiciones*» que si, en algún momento pretendía proveerlo Su Santidad o el nuncio, «*desde luego, se les estaba privando del patronato*».

52. Una certificación dada en 1752, por los protectores de la comunidad de presbíteros de dicha Parroquia de Santa María, en el que se puede comprobar cómo el abad provee el beneficio en los meses ordinarios. Un testimonio dado en 1744 por Miguel Malet, de la presentación hecha por Francisco de Torres del citado beneficio sin dar cuenta a la Cámara para su aprobación. Y un testimonio de Miguel de Oliveras, notario, dado en la villa de Olot a 31 de marzo de 1752, en el que consta que la referida Iglesia de Santa María no estaba unida a la abadía ni al monasterio, y que la tercera parte de los derechos parroquiales que percibía el abad por la residencia tampoco eran de los bienes y rentas de la abadía ni monasterio, y que aunque en éste tenía que cumplir algunas obligaciones en días clásicos y percibía por ello una corta porción de pan y vino, no consistía la dotación principal en esto sino en la tercera parte mencionada de los derechos parroquiales de la expresada iglesia donde tenía su residencia y la obligación de regir el coro y asistir al cura en la administración de los Santos Sacramentos.

53. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 102v-104, 109.

Por ello, le suplicaron que lo declarara libre de las reservas pontificias, de modo que no pudiera proceder la Santa Sede a su provisión aunque las vacantes se produjesen en los meses apostólicos *«que corresponden por el concordato»*; y que expidiera el despacho correspondiente para poder poner en posesión del beneficio al nombrado *«por el canónigo turnario o según práctica o como la merced real fuese»*.

Visto en la Cámara, con lo expuesto por el fiscal, y reconociendo que, aunque el patronato de dicho beneficio era *«eclesiástico como dejado a persona y comunidad eclesiástica, se hallaba, sin embargo, enteramente libre y exento de toda reservación apostólica y de la disposición del último concordato»*, tanto porque las cláusulas de la fundación eran absolutamente incompatibles con la disposición de las reservas⁵⁴, como porque fue voluntad expresa del fundador excluir todo lo que pudiere impedir al abad y cabildo la presentación en todo tiempo y vacante, el rey declaró, por resolución a consulta de la Cámara de 21 de julio de 1762, que el mencionado beneficio estuviera exento de las reservas y de la disposición del último Concordato y que, en su consecuencia, pudiera entrar en posesión el provisto por el canónigo turnario, y en su conformidad rogó y encargó, mediante real cédula del 5 de septiembre de 1762⁵⁵, al obispo de Gerona, a su provisor y vicario general, y a las demás personas a quienes tocar pudiere, que lo tuvieran así entendido para su cumplimiento. Y que registrada esta real cédula en los libros de la Curia Episcopal de Gerona, se devolviera el original a la parte de la Colegiata de San Feliu para su observancia, y para que la tuviera en guarda de su derecho.

4. ACTUACIONES REALES CONTRA LAS «INTROMISIONES» DE LA SANTA SEDE

Como hemos podido comprobar, era competencia real defender los derechos de patronato de sus súbditos, aun religiosos, frente a las posibles intromisiones de la Santa Sede.

Para poder llevar a cabo estas importunaciones, el papa se servía de variados artificios o instrumentos, entre los que destacaban las bulas, breves y rescriptos apostólicos, expedidos por la Curia pontificia. Ya hemos visto cómo actuaba la Corona cuando éstos intentaban inmiscuirse en sus derechos y regalías; habitualmente se procedía a su recogida, envío y retención en la Cámara, con el consiguiente secuestro de las rentas del beneficio al que fueran dirigidos, hasta el momento de la sentencia definitiva del juicio. Han sido expuestos con anterioridad tres casos de este tipo.

En el primero, que enfrentó a las «cuatro dignidades reales» y al cabildo de la Catedral de Solsona, Felipe V ordenó el 2 de febrero de 1740 al Capitán General y a la Audiencia que no consintieran que en los pleitos relativos al Real Patronato se acudiera a otros tribunales, ni que se siguieran en la Curia romana, *«mediante el recogimiento y detención (por la Cámara) de los despachos que a este fin se expedieren»*⁵⁶.

La segunda intervención real tuvo relación con la resigna ilegal del curato de San Pador en la Iglesia de la villa de San Pedro de Oro, que hizo Francisco Panadés

54. Su fundador fue un lego.

55. Expidió otra real cédula con el mismo contenido el 2 de agosto de 1763.

56. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 284-287.

en favor de Ignacio Bovés en 1746, en virtud de una bula de gracia pontificia. El rey procedió del mismo modo: recogió la bula y la retuvo en la Cámara, emplazando a los detentadores ilegales del curato para pedirles explicaciones⁵⁷.

La tercera ocasión en que la Corona se preocupó por la validez o nulidad de una bula pontificia tuvo como causa el nombramiento de Bonifacio Ferrer en 1752 para el beneficio de Santa María fundado en la capilla del Castillo de Alós y su toma de posesión. La Cámara entabló pleito a instancia del fiscal, que creía que dicho beneficio pertenecía al Real Patronato. Por ello, sus frutos fueron secuestrados y se retuvo la bula. Pero, como ya se indicó, el fiscal perdió el caso, y tuvo que respetarse la provisión pontificia: quedó Ferrer en la posesión de la prebenda y todos los frutos secuestrados le fueron devueltos⁵⁸.

Otros dos casos completan esta categoría de intervenciones reales.

El primero de ellos «*toca*» una pieza eclesiástica de gran valor para el Patronato Real: el arciprestazgo de la Colegial de San Pedro de la villa de Ager. En 1751, el agente fiscal de la curia eclesiástica de dicho arciprestazgo, Francisco Montealegre, acudió a Fernando VI para poner en su conocimiento un precedente importante: que en 1704 Felipe V ofreció al *tunc* arcipreste su auxilio y protección en cuanto se le quiso perjudicar en los «*honores, obvenções, regalías y derechos*» y, más especialmente, en su jurisdicción absoluta –tanto civil como criminal– sobre todos los prebendados de la colegiata, sus capellanes, sirvientes y demás eclesiásticos de su «*particular diócesis*»⁵⁹, pues los obispos con quienes confinaba quisieron ejercer jurisdicción en su territorio –perjudicando así sus derechos y, consecuentemente, las regalías de la Corona– en virtud de bulas pontificias que para ello les capacitaban.

Y después de dar dicha noticia, y recalcar que desde el referido año 1704 habían quedado claras las prerrogativas de la dignidad arciprestal, se quejó ante el monarca de que un canónigo de esa Colegial llamado Blas Porta había obtenido ilícitamente un breve apostólico que le eximía de la jurisdicción del arcipreste, al tiempo que le confería la facultad de liberar de tal sujeción a cualquiera de los canónigos de dicha iglesia, haciéndolos súbditos suyos. Y para evitar tan flagrante usurpación de las atribuciones del arcipreste, le suplicó que librara real cédula cometida a los justicias del Principado para que recogieran de manos del citado canónigo el mencionado breve, y lo remitieran a la Cámara.

Tras ser tratado en ella el asunto, por decreto del 24 de noviembre de 1751, el monarca resolvió expedir una real cédula seis días después, ordenando la recogida de la bula, con todos los autos originales que se hubieren hecho, y su envío al secretario de la Cámara *ad effectum videndi*, y para proveer lo conveniente a la protección de la regalía del Real Patronato⁶⁰. Aunque no conocemos la resolución real, podemos afir-

57. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 67-70v.

58. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 307v-309v.

59. El territorio del arciprestazgo de Ager se consideraba una diócesis, pues la dignidad arciprestal gozaba en él de las mismas atribuciones que un obispo, y era independiente de cualquier juez ordinario eclesiástico.

60. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 188v-191.

mar, sin miedo a caer en error, que el poderoso ypreciado arciprestazgo de Ager siguió disfrutando de sus honores, derechos y jurisdicciones sin menoscabo alguno.

El segundo y último caso de actuación real contra escritos apostólicos también tiene como escenario la Iglesia Colegial de la villa de Ager. Pero en esta ocasión el breve pontificio tiene otra finalidad muy distinta, y atentatoria contra los derechos y regalías de la dignidad y de la Corona: enajenar propiedades del arciprestazgo en favor del cabildo para sufragar los gastos de los pleitos que mantenía contra el arcipreste. Veámoslo con más detenimiento.

En 1752, el mismo Francisco Montealegre no dudó en manifestar sus quejas a Fernando VI sobre el hecho de que el cabildo de dicha iglesia, para sufragar los crecidos gastos de los voluntarios pleitos que seguía contra la dignidad arciprestal, en lugar de utilizar sus propias rentas y caudales, había conseguido de la Corte romana un breve facultándole para enajenar propiedades del arciprestazgo «*hasta en cantidad de 500 escudos de aquéllas que en parte sirven para el alimento y congrua de sus individuos*», «*en perjuicio de la dignidad, de sus sucesores y de las regalías*». A ello añadió que la petición de la gracia no siguió a un acuerdo unánime de todos los miembros del cabildo, y que tampoco contaron para nada con el arcipreste, que era su verdadero ordinario. Aún más, abundó en que si se permitiera al cabildo llevar a cabo la mencionada enajenación, se crearía un peligroso ejemplo a seguir por los demás cabildos a la hora de costear sus pleitos, sobre todo los dirigidos a «*destruir la dignidad sin quererla reconocer por su superior y cabeza*».

Para remedio de todo, le suplicó que se sirviera librar la cédula correspondiente para que el citado cabildo, bajo graves penas, no enajenara renta alguna, y le remitiera el breve para que, en su vista, se proveyese lo necesario para la conservación de la regalía del Real Patronato.

Habiéndose visto la petición en la Cámara, por decreto de 8 de noviembre, el rey resolvió expedir un real despacho con fecha de 23 del mismo mes, mandando al Capitán General que recogiera el citado breve junto con los autos originales que en su virtud se ejecutaren, y lo enviara todo al secretario de la Cámara⁶¹.

Por consiguiente, podemos concluir que el rey no se arredraba ante nada ni ante nadie, ni siquiera ante los escritos del papa, a la hora de preservar tanto sus derechos y regalías como los de sus protegidos.

5. PLEITOS CON MOTIVACIONES ECONÓMICAS

Otro grupo de intervenciones reales en pleitos es el que hace referencia a cuestiones monetarias o, en general, al cobro indebido de rentas de cualquier tipo, tanto en moneda como en especie.

Como ya se indicó, la ley dada por Fernando VI el 3 de octubre de 1748 llevaba a la Audiencia del Principado todas las causas y negocios tocantes a las Iglesias del Real Patronato en las que se disputaran dotaciones y rentas, y a la Cámara sus apelaciones⁶². Esta disposición real se plasmó en el cuerpo general de leyes, entre otros motivos, por la existencia los años inmediatamente anteriores (entre 1739 y 1746) de

61. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 289-291v.

62. Ley XVII, del título XVII, del libro I de la *Novísima Recopilación*.

un aluvión de pleitos de este tipo. En Cataluña tres fueron los focos principales: la abadía del monasterio de Santa María de Ripoll, la villa de Cambrils, y el arciprestazgo de la Iglesia Colegial de la villa de Villabeltrán.

Durante este periodo de tiempo, el abad de Ripoll se mostró muy activo en defensa de las rentas anexas a dicho monasterio. A principios de 1743 elevó a Felipe V un pedimento solicitando el sobreseimiento de la causa que afectaba a los bienes y rentas del priorato de Panisas, perteneciente a dicho establecimiento monástico. Y la suplicación tuvo éxito pues, tras ser estudiada en la Cámara, el 29 de enero de ese año, el rey escribió un real despacho al corregidor de la ciudad de Gerona o a su lugarteniente en la villa de Besalú ordenándole que se procediese al sobreseimiento absoluto del proceso y al envío de los autos originales a la Audiencia del Principado⁶³.

Asimismo, el citado abad fue una de las partes, junto con el mismo prior de Panisas —el doctor Damián Tutau— y la priora del convento de Pinalada, del pleito que le enfrentó con José Salés, superior del Seminario jesuita de la villa de Perpiñán, sobre el reintegro de varios bienes que detentaba sin título el prior de Panisas. La Audiencia determinó el caso en primera instancia en contra de sus intereses el 24 de julio de 1744, por lo que apeló a la Cámara. El 12 de agosto le fue admitida la apelación, y se expidió real despacho el 26 de noviembre, dirigido al Capitán General y la Audiencia para que fueran enviados los autos compulsados del pleito al secretario, y emplazaran a las partes a acudir al tribunal del consejo en el término de un mes tras la notificación⁶⁴.

En la villa de Cambrils, la ermita de Nuestra Señora del Buen Camino⁶⁵ pertenecía al Real Patronato. El pleito nació a raíz de la cesión y traspaso de dicha ermita por el concejo, justicia y regimiento de la villa al prior y convento agustino de Nuestra Señora de Gracia, a título de donación, «*con varias condiciones y grávamenes impuestos en beneficio del pueblo*», con el fin de proceder al traslado del convento a la ermita. En virtud de tal donación, los religiosos agustinos tomaron posesión de la citada ermita, practicando las diligencias necesarias para la fabricación del convento. Viendo perjudicada su regalía del Real Patronato, Felipe V escribió a las autoridades de la villa el 8 de marzo de 1742 para que justificaran la donación, enviando la respuesta al secretario de la Cámara⁶⁶.

Así procedieron, de modo que el monarca, en carta al Capitán General del 10 de abril del año siguiente, concedió a los agustinos la licencia para poder continuar la obra así como los maravedís devengados del producto de las propiedades y limosnas de la referida ermita, a condición de que llevaran de ello cuenta formal y que, en el caso de perder el juicio entablado por la legalidad de la donación⁶⁷, los reintegrarían y demolerían la construcción⁶⁸.

63. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 323v-324.

64. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 358-360.

65. Situada extramuros de la villa, en el despoblado de Taudell, término anexo de ella.

66. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 316-317.

67. El pleito enfrentó al cura y beneficiados de la Iglesia Parroquial de la villa de Cambrils y el fiscal eclesiástico del Arzobispado de Tarragona, contra el prior y religiosos agustinos de la Ermita de Nuestra Señora del Buen Camino.

68. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 327-327v.

Pero no todas las propiedades y limosnas de la ermita les fueron entregadas. Por ello, el prior le elevó a Felipe V una nueva petición para que le fueran dadas por los administradores y depositarios de las rentas de la ermita las brisas (producto devengado perteneciente al último año) y «*dos casullas muy ricas que se conservan en un arca de la ermita, con diferentes joyas, todo perteneciente al ornato y culto de Nuestra Señora*»⁶⁹. Tras ser tratado el asunto en la Cámara, el 8 de octubre de 1744, el rey accedió a la petición del prior, con la salvedad de que las brisas fueran trasladadas al ayuntamiento de la villa⁷⁰. La documentación no nos permite conocer cómo acabó el pleito.

Las principales intervenciones reales en pleitos relacionados con el cobro de rentas de iglesias del Real Patronato se centraron en la Colegial de Santa María de Villabeltrán, en la diócesis de Gerona, coincidiendo con la actividad del arcipreste Manuel de Alós y Rius, su posterior promoción a la dignidad de maestrescuela de la Catedral de Lérida y cancelario de la Universidad de Cervera, y el nombramiento como su sucesor de Jaime Olsina.

Hay que remontarse hasta 1737 para observar el primer contencioso relativo al cobro indebido de rentas de la Colegial. Dicho año, el arcipreste –Manuel de Alós y Rius–, junto con los demás prebendados residentes en dicha iglesia, en cumplimiento de sus estatutos, se repartieron los frutos y rentas de Gerónimo Mercader, Pedro Camps y Jacinto Costa, tres canónigos ausentes de ella por haber sido desterrados al haber accedido a sus canonjías en virtud de nombramientos efectuados por el «*gobierno intruso*»; frutos y rentas correspondientes a los tres años que llevaban extrañados.

Viéndose notoriamente perjudicados, los canónigos pidieron a Felipe V licencia para demandar las cantidades que creían corresponderles a la Junta Eclesiástica. Así procedieron, introduciendo instancia contra el arcipreste y el cabildo ante el juez ordinario de Gerona. Éste dictaminó en favor de la parte de los tres canónigos, por lo que ordenó la restitución de dichos frutos a sus legítimos poseedores.

Al no conformarse con dicha sentencia, la otra parte interpuso en 1738 apelación al metropolitano de Tarragona contra el ordinario de Gerona, aduciendo que se había obrado en contra de los estatutos y costumbres de la Colegial y en perjuicio del Patronato Real, puesto que los canónigos habían ocultado los motivos reales de su ausencia del Principado. Asimismo, Alós escribió al rey suplicándole su intervención. Éste, al tocarse una pieza eclesiástica de su patronato, proveyó el 15 de diciembre que la Cámara protegiera y abogara por la instancia del citado arcipreste. De ese modo, se trasladó a dicho tribunal central un informe de la Audiencia de Cataluña.

Tras ser estudiado por el fiscal, las quejas de la parte apelante fueron consideradas justas, así como graves los actos de los canónigos desterrados, por vulnerar «*las regalías supremas del Estado y del Real Patronato*». Por ello, el 5 de marzo de 1739 se expidió un real despacho al arzobispo de Tarragona rogándole el envío «*por compulsa*» de los autos y papeles originales referentes a dicho caso a la Cámara, sin la menor dilación, para que allí se administrara la justicia competente⁷¹.

69. No las entregaron amparándose en que en la anterior real cédula no se especificaban.

70. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 354-356.

71. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 273-275.

Posteriormente, Alós suplicó a Felipe V que despachara real cédula de emplazamiento a la Cámara para Jacinto Costa, Pedro Camps, y los herederos del difunto Gerónimo Mercader, con apercibimiento de que en el caso de no acudir a ella se sustanciarían los demás autos en los estrados del Consejo con el consecuente perjuicio de no poder alegar nada en su defensa.

El monarca consideró conveniente la recomendación del arcipreste, por lo que el 15 de noviembre de 1740 resolvió expedirles despacho de emplazamiento a la Cámara en el plazo de los 30 días siguientes la notificación⁷².

El pleito aún se prolongó largo tiempo, tanto que los canónigos acudieron al rey pretextando que con el transcurso de los años murieron los que los defendían⁷³, y que ignoraban lo que habían dicho y alegado, sospechando que habría sido lo que conducía a su derecho. Por ello, le suplicaron la entrega de los autos del pleito. Felipe V, por real cédula del 23 de noviembre de 1745, accedió a tal «*pedimento*»⁷⁴. Y a partir de este momento perdemos la pista al caso. Pero se puede aventurar que llevaron las de ganar el arcipreste y los canónigos residentes.

Manuel de Alós dejó el arciprestazgo de Villabeltrán al ser promovido a la dignidad de maestrescuela de la Catedral de Lérida y cancelario de la Universidad de Cervera el 21 de noviembre de 1743, para la que obtuvo bulas pontificias datadas el 20 de abril⁷⁵. Fue sustituido el 10 de marzo siguiente por el doctor Jaime Olsina⁷⁶. Ambos obtuvieron sus ejecutoriales el 4 de agosto siguiente⁷⁷. Olsina no tardó mucho en elevar una protesta a Felipe V, puesto que Alós se quedó con los frutos y rentas de la dignidad arciprestal hasta el día en que Olsina tomó posesión de ella, cuando en derecho le correspondían hasta la fecha en que obtuvo las bulas apostólicas para la citada maestrescolía. En razón de ello, Olsina pidió que se le entregaran los frutos y rentas que le pertenecían. El monarca, en real cédula de 3 de diciembre de 1744, accedió plenamente a la petición del nuevo arcipreste, siéndole notificada su decisión a Pedro Ravasa, canónigo de la Colegial y apoderado de Manuel de Alós⁷⁸.

Ravasa no devolvió la cantidad estipulada a Olsina porque Alós se lo prohibió. Éste se excusó pretextando que el tribunal eclesiástico de la Universidad de Cervera le penaría con la excomunión y 100 libras catalanas si las entregara. Tal explicación convenció poco a la Cámara, de modo que, teniendo en cuenta la falta de jurisdicción del tribunal mencionado, Felipe V resolvió, por orden del 4 de junio de 1745, que tuviera efectivo cumplimiento su despacho del 3 de diciembre de 1744⁷⁹.

Pero tampoco hizo caso Alós a dicha disposición real. No sólo no dejó libres dichos frutos, sino que además retuvo la librería, vidrios y otras alhajas de la casa arciprestal. El rey reaccionó de inmediato: por real decreto de 23 de abril de 1746 resol-

72. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 287v-289v.

73. Lo que es claro exponente de la longevidad de los eclesiásticos acomodados.

74. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 40-41v.

75. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 337-338.

76. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 339-339v.

77. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 346-346v, y ff. 347-348v.

78. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 360-361.

79. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 372-374.

vió que se remitiera el pleito al obispo de Gerona, y que el provisor y vicario general del obispado siguiera el mencionado asunto, otorgando las apelaciones a la Cámara. Y para informarles de todo ello, escribió el real despacho del 17 de mayo siguiente⁸⁰. La documentación no nos permite conocer si, por fin, consiguió Olsina que se le reintegraran las rentas que en derecho le pertenecían.

No acabaron ahí las andanzas de Manuel de Alós y Rius, sino que ideó otra forma de damnificar a su sucesor en la dignidad arciprestal.

Desde 1599, tras el fallecimiento o la promoción del arcipreste, el cabildo nombraba a dos canónigos revisores para que acudiesen a la casa arciprestal junto a maestros albañiles y carpinteros para que éstos, bajo juramento, hiciesen relación de las obras necesarias para su reacondicionamiento o de las cantidades que se requiriesen para hacerlas; gastos que correrían a cargo del patrimonio del muerto o del ascendido.

Esta máxima se cumplió inexorablemente a lo largo de los siglos, hasta la promoción de Manuel de Alós, quien no realizó ni reparó obra alguna en dicha casa.

Habiendo requerido Olsina la opinión de los maestros albañiles y carpinteros, éstos le significaron que la casa amenazaba ruina grave, y que se necesitaría realizar obras por valor de 526 libras para albañilería y 362 libras y 2 sueldos para carpintería. Ello dio origen a una súplica que dirigió a Felipe V. Éste resolvió, por real cédula de 24 de junio de 1745, que fuera la Audiencia la que entendiera, sustanciara y determinara el pleito en primera instancia⁸¹.

La última ocurrencia que llevó a la práctica el ínclito Alós, siendo ya maestrescuela y cancelario, fue acudir en 1745 al tribunal eclesiástico episcopal de Gerona para intentar cobrar las rentas del arciprestazgo como si hubiese asistido personalmente a todos los actos que le correspondían en el tiempo en que se ausentó a Barcelona y Madrid para tratar sus propios negocios e intereses. Al comprender que no podía dictaminarse en modo alguno en su favor, presentó la causa al juez escolástico de Cervera.

El cabildo, con la intención de evitar circuitos inútiles y gastos superfluos, pidió a Felipe V que decidiera a qué juez competía entender el pleito con la menor dilación para que Alós no se aprovechara del débil fundamento del que se había valido, «*el de la conservación en la Confirmación de Estatutos de la Universidad literaria de Cervera*» (de la que era cancelario), sin tener el mencionado juez la jurisdicción necesaria para tratar dicho caso. El rey resolvió, por decreto de 13 de noviembre de ese año, que los autos fueran enviados tanto por el juez escolástico de la Universidad de Cervera como por el ordinario de la villa de Villabeltrán a la Curia Eclesiástica de Gerona, a cuyo juez declaró competente para el referido pleito. La resolución real fue comunicada a ambos jueces por cédulas expedidas el 23 del mismo mes⁸². Asimismo, el 16 de mayo de 1746 envió despacho al provisor y vicario de la diócesis de Gerona para que, en atención al decreto del 23 de abril anterior, examinara los autos y los determinara en primera instancia, otorgando las apelaciones –en el caso de que las hubiere– a la Cámara⁸³.

80. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 72v-74v.

81. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 24-26.

82. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 40-41v.

83. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 70v-72.

No conocemos tampoco el final de este pleito. No obstante, lo que sí queda claro es que el rey era quien decidía cuando una iglesia del Real Patronato se veía inmersa en un pleito en el que se disputaran dotaciones y rentas.

6. DILIGENCIAS REALES EN PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PRELATURAS

También intervenía el monarca en los pleitos que afectaban a los prelados. Desarrollemos en primer lugar los expedientes relacionados con los obispos de las mitras catalanas.

Como ya se indicó, el Arciprestazgo de la Iglesia Colegial de San Pedro de la villa de Ager era una de las piezas más importantes del Real Patronato en Cataluña. Ejercía sobre más de 70 parroquias una jurisdicción «*casi episcopal*», la omnimoda jurisdicción ordinaria, lo que le facultaba para convocar concursos para rectorías, visitar, convocar sínodos, dar la bendición solemne, conceder cuarenta días de indulgencia, y lo que más nos interesa, realizar la colación en los meses ordinarios y conceder dimisorias para ordenar.

Por supuesto, el obispo de Urgel consideraba esta circunstancia contraria a las disposiciones conciliares, por lo que no dudó en pleitear contra el arcipreste. Desde 1704 mantenía contra él un contencioso con la intención de despojarle de las referidas prerrogativas, y en 1718 aún no se le había dado solución.

La intervención real sobrevino como consecuencia de quedar vacante el arciprestazgo en 1717. Tras el fallecimiento de Miguel de Marimón, la dignidad pasó al «*intruso*» Benito Viñals de la Torre. No aceptando tal nominación, Felipe V lo removió del cargo, designando en su lugar, el 23 de abril de ese año, a Pedro Descallar⁸⁴. Pero el arciprestazgo se mantuvo vacante, pues Descallar murió poco antes de tomar posesión de él. Entonces, hasta hallar a una persona con méritos suficientes para convertirse en la cabeza de la Iglesia Colegial, el monarca nombró como secuestrador de los frutos de la dignidad al doctor Antonio Pairo el 28 de julio de 1718⁸⁵.

Al enterarse el nuncio de Su Santidad, Pompeyo Aldobrandi –arzobispo de Neocesarea– de que en el arciprestazgo no había quien administrase el pasto espiritual a los fieles, y de que ni el cabildo ni el obispo más antiguo de la provincia lo habían provisto de pastor, mediante un breve fechado el 14 de diciembre de 1717 nombró al vicario general doctor Pedro Rovira, con todas las facultades, gracias, privilegios e indultos de los vicarios generales, disponiendo así provisiones en el interin, hasta que Su Santidad proveyere otra cosa.

Al no aceptar tal nombramiento, el obispo de Urgel se negó a admitir las dimisorias dadas por Rovira, y recurrió ante el rey. Tras estudiar el caso, Felipe V, por resolución a consulta de 12 de diciembre de 1718, tuvo que permitir que el citado Rovira persistiera en el cargo, pues la Colegial disponía de un indulto de Alejandro III para nombrar, en sede vacante de arcipreste, a un vicario general con las mismas facultades y atribuciones que aquél. Asimismo, confirmó que tanto el obispo de Urgel como

84. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 51v-52.

85. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 108-110v.

los demás obispos y arzobispos debían de aceptar las dimisorias otorgadas por el vicario general. Y para el puntual cumplimiento de sus disposiciones expidió real despacho a las autoridades seculares del Principado con fecha de 7 de febrero de 1719⁸⁶.

Todos los intentos del obispo de Urgel para menoscabar los privilegios y facultades del arciprestazgo de Ager fueron vanos. Ni consiguió limitar la jurisdicción cuasi episcopal que ejercía en su «*territorio separado*», ni logró acrecentar sus rentas con las apetitosas del arciprestazgo, que era quizá lo que más le interesaba y constituía su fin último. No sólo había de luchar con legítimos títulos e indultos apostólicos, sino que también tenía que enfrentarse a los intereses de una Corona siempre atenta a la defensa de sus regalías⁸⁷.

Tampoco actuó el rey en favor de la parte del obispo de Barcelona, Asencio Sales, en el pleito que le enfrentó a la Congregación Benedictina Claustral en 1757 por creer perjudicada su jurisdicción episcopal.

Considerando perjudicial a sus intereses una sentencia de la Audiencia del Principado dada el 6 de mayo de ese año, Sales apeló ante la Cámara, suplicando que el rey se sirviera expedir una real cédula proveyendo el envío de los autos y demás papeles y diligencias originales, y el emplazamiento de las partes a dicho tribunal de apelación. El rey, de acuerdo con la Cámara, y por decreto del 15 de junio, aceptó el pedimento del obispo⁸⁸.

Tras escuchar las alegaciones de ambas partes, por decreto de 5 de mayo de 1759 se acordó dar razón a la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 6 de mayo de 1757 en que se declaró no haber lugar a la declinatoria de fuero opuesta por el obispo de aquella ciudad. Y seis días después se expidió real cédula al Capitán General para que se procediera en orden a la ejecución y cumplimiento del mencionado decreto⁸⁹.

Asistimos, pues, a un caso similar al anterior. El obispo de Barcelona, al creer perjudicadas sus competencias jurisdiccionales por las facultades de los abades de la expresada congregación en su diócesis⁹⁰, pleiteó sin éxito contra ellos. De nuevo, el rey actuó afanosamente como protector de las iglesias y comunidades de su patronato.

No acabó ahí la lucha particular de Asencio Sales contra los abades de la Congregación. En 1762 lo hallamos de nuevo enzarzado en un pleito de cariz jurisdiccional contra el del monasterio de San Cugat del Vallés.

Tras determinarse el 11 de enero de dicho año en la Audiencia del Principado en beneficio de la parte contraria, compuesta por el citado abad de San Cugat del Vallés, el fiscal real de dicho tribunal, y los regidores y operarios de dicha villa de San Cugat y de la iglesia de San Pedro de Otabiano sita en ella, Sales pidió a Carlos III, «*en ca-*

86. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 112-113v.

87. Puede observarse con claridad que, pese a necesitar la Corona el apoyo de los obispos para asegurar la delicada situación social postbélica, Felipe V anteponía a los intereses políticos sus derechos del Real Patronato.

88. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 6v-8.

89. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 48v-49v.

90. Recordemos que en la diócesis de Barcelona tres eran los monasterios benedictinos claustrales: San Cugat del Vallés, Santa María de Serrateix, y San Pablo del Campo –al que estaba unido el de San Pedro de la Portella–.

lidad de apelación, nulidad, queja y agravio, o por el recurso que más haya lugar» la revisión de la sentencia.

El obispo protestaba por la pretensión del abad de gozar de «*pensión omnimoda episcopal*» independiente, y «*con la cualidad de nullius y territorio separado*» de la citada parroquia, la de Santa María de Taudell, y las demás iglesias y parroquias de su abadía⁹¹. Además, el abad quería que se le mantuviese en la posesión de la jurisdicción eclesiástica activa sobre el clero y pueblo de las parroquias referidas y sus sufragáneas, sin estar obligado a recibir la visita del obispo más que para la cura de almas y la administración de sacramentos –en su condición de delegado de Su Santidad según lo establecido por el Concilio de Trento–. Y también que se le concediese la facultad de dar licencias a los párrocos para asistir a los matrimonios, dispensar publicaciones, bendecir candelas, pilas bautismales, entre otros actos.

Y todas estas aspiraciones del abad le fueron concedidas en la sentencia de la Audiencia. Para que ésta fuera revisada y pudiera tener efecto la apelación, suplicó al rey que librara la correspondiente real cédula para la remisión de los autos íntegros y originales y el emplazamiento de las partes a la Cámara para proceder a sus alegaciones en defensa de sus intereses.

Tras ser visto el pedimento en dicho tribunal, con lo expuesto por el fiscal, por decreto del 3 de marzo de 1762 se procedió a la admisión de la apelación, y ocho días después se expidió real despacho dirigido al Capitán General y la Audiencia para que hicieran lo conveniente para el envío de los mencionados papeles y emplazaran a las partes a la Cámara con un plazo de 15 días una vez hecha la notificación⁹².

Sería interesante conocer cómo acabó este pleito, por saber, entre otras cosas, si la insistente defensa de sus intereses episcopales reportó al obispo de Barcelona algún fruto, y si pudo dobligar el apoyo real a los abades de su patronato.

Tampoco llegamos a conocer el desenlace del siguiente pleito. Y esto es especialmente negativo para el estudio por cuanto podría perfectamente ser uno de los pocos en los que el rey concedió su apoyo a un obispo, el de Lérida, en perjuicio del Gran Prior de la orden militar de San Juan de Jerusalem en el Principado⁹³. Para lograr el favor real, el prelado ilerdense no dudó en recordar en su pedimento que la Iglesia Catedral de Lérida era del Real Patronato, y que los derechos de la mitra estaban bajo la real protección.

Además, el caso presenta un gran interés porque nos permite conocer los procedimientos de arbitraje en los casos en que chocan las jurisdicciones eclesiástica y secular.

La primera noticia que tenemos del pleito procede de una carta del Gran Prior, Manuel de Montoliu, dirigida el 24 de enero de 1770 al regente de la Audiencia del Principado haciéndole saber que, al entrar en posesión del priorato a mediados de 1768, halló pendiente entre su antecesor y el obispo de Lérida, Manuel Macías Pedrejón, una causa o pleito de competencia –que seguían desde 1759– sobre jurisdicción

91. Prácticamente, las mismas facultades que detentaba el arcipreste de la Iglesia Colegial de San Pedro de Ager, «*en perjuicio del obispo de Urgel*».

92. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 95v-97v.

93. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 194-200.

eclesiástica y espiritual relativa a las parroquias y moradores de los lugares de Corbines y Torrelameo (que pertenecían sin disputa a la jurisdicción temporal del Gran Prior), con ocasión de unos procedimientos practicados por la curia eclesiástica de dicho obispo contra el vicario general y escribano del prior antecesor, y contra el teniente del baile de Torrelameo.

Tras considerar ambas partes que no se podía encontrar solución a todos los puntos litigados en el pleito, y que declarar a qué curia correspondía su conocimiento supondría el inicio de otras tantas disputas de perniciosas consecuencias, y tal vez con escándalo de los fieles —si se fulminasen censuras como las de la curia episcopal de Lérida contra dicho teniente de baile, que tuvo que declarar nulas el metropolitano de Tarragona—; el Gran Prior hizo saber, «*movido por su genio pacífico*», que estaba dispuesto a tratar todos los puntos por medio de una amigable transacción y concordia⁹⁴.

Mas viendo infructuosas sus diligencias, propuso con el mismo fin la mediación del arzobispo de Tarragona, igualmente en vano porque al referido prelado jamás le pareció aceptable este medio de conciliación.

La causa se siguió según las pautas tradicionales, es decir, por los dos árbitros nombrados por las partes. Montoliu intentó acelerar los trámites del pleito, suministrando una multitud de pruebas instrumentales y testimoniales en el corto tiempo de un año. Pero no sirvieron de mucho puesto que los árbitros acabaron en discordia, manteniendo cada uno las respectivas pretensiones del obispo y del Gran Prior.

Y siendo en estas circunstancias el medio más común nombrar un tercer árbitro, lo propuso también al obispo, manifestándole su disposición a que fuera el canceller «*que por el rey está nombrado en el Principado para las competencias que ocurren entre los tribunales eclesiásticos y seculares*»⁹⁵.

94. Ante asuntos de conflicto motivados por competencia de jurisdicción, los jueces eclesiásticos no eran superiores a los seculares, sino que se encontraban en igualdad de condiciones respecto de su preeminencia, por lo que el uno no podía obligar al otro, ni tampoco podía declararse ninguno a sí mismo competente. Ante la situación de igualdad, se seguía el procedimiento de buscar la solución en el nombramiento de árbitros por ambas partes contendientes, para que fuesen ellos quienes conociesen y acordasen a cuál de las dos jurisdicciones correspondía el conocimiento y resolución final de la dicha competencia. En el caso de que los árbitros elegidos por los jueces eclesiástico y secular no llegasen a un acuerdo, según la Concordia de D.^a Leonor y posteriormente, para el reino de Aragón, en virtud del Fuero otorgado, surgía la actuación del Canciller de Competencias. En M.^a Luisa Vicente García, «Institucionalización y ocaso del Canciller de Competencias en el reino de Aragón», en *Estudios*, Zaragoza, 1980-81, pp. 89-100.

95. La documentación nos permite seguir de cerca la figura del juez de competencias. Tras la conquista de Barcelona, el duque de Berwick nombró canceller del Principado al doctor Félix Vilaplana, abad del monasterio de Ripoll. Vilaplana suplicó a Felipe V su aprobación y nombramiento, accediendo éste, en atención a las buenas prendas y partes de su persona y al celo y desempeño con que se sirvió, el 3 de marzo de 1717. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 40-41v. Fernando de Zúñiga y Ribera, también abad de Ripoll, fue quien le sustituyó, siendo nombrado el 12 de enero de 1736. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 258. A su muerte, Jaime Cortada y Bru se convirtió en nuevo juez de contenciones por real cédula del 6 de septiembre de 1742. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 320v-321v. Su promoción al empleo de auditor de la Sacra Rota por la Corona de Aragón se tradujo en el nombramiento, por decreto del 20 de mayo de 1745, de Esteban Bellet, canónigo de la Catedral de Barcelona, quien tomó posesión el 26 de octubre del mismo año. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 34-35v.

Pero tampoco así logró que el obispo accediese a su propuesta, enterándose de que el prelado tenía la intención de abocar la causa a la Curia Romana, para seguir fuera del reino un litigio costoso y dilatado, dejando entretanto sin remedio los gravísimos perjuicios que ocasionaba la disputa de sus respectivas pretensiones, como era, entre otros, la vacante del curato de la Parroquia del referido lugar de Torrelameo, cuya provisión le impedía el obispo al no querer admitir a examen a los sujetos que le nombraba según se había practicado en las vacantes inmediatamente anteriores.

Por ello, había creído el Gran Prior que era su deber hacérselo presente al fiscal de la Cámara, para que, en el caso de que el obispo reportase letras de la Curia Romana para la abocación de aquel pleito, se opusiese al pase o *exequatur* de ellas por no haberse practicado el medio legal del nombramiento del tercer árbitro. Asimismo, pidió al fiscal que mediara para que se pasase a dicho obispo un oficio instándole a que se dispusiera a terminar con el pleito mediante una amigable composición y concordia con nombramiento de árbitros (y en caso de discordia, un tercero) que conviniesen y aclarasen todos los puntos que amenazaban nuevas disputas entre ambas partes sobre la misma jurisdicción, pues con este medio que en otras ocasiones había servido el rey disponer, y también sus tribunales, evitarían el dispendio de las rentas de sus dignidades —que más útilmente podían y debían aplicar a otros provechosos destinos—, así como la extracción del reino de los intereses que la abocación precisaría, y las fatales consecuencias que producían semejantes litigios *«siempre perjudiciales a los súbditos que mientras vierten las disputas entre sus superiores no reconocen debidamente a ninguno de ellos»*.

En vista de esta representación acordó la Cámara que se remitiese copia de ella (como se ejecutó el 20 de noviembre de 1771) al nuevo obispo de Lérida, Joaquín Antonio Sánchez Ferragudo⁹⁶, que entonces se hallaba en la Corte, para que cuando hubiese tomado posesión de su obispado y entrado en conocimiento de los asuntos que litigaba su dignidad con la del nominado Gran Prior, informase lo que se le ofreciese y pareciese sobre el contenido de dicha carta o representación; y que se le insinuase al mismo prelado de Lérida (como también se ejecutó en dicho día 20 de noviembre) que sería del agrado de la Cámara que estas disputas se finalizasen, bien fuese por un tercer árbitro que, de consentimiento de las partes interesadas, dirimiese la discordia de los árbitros, o bien fuese por otro medio legal con el cual se lograse su decisión sin que llegase a ser pleito contencioso.

El 4 de marzo de 1773 evacuó su informe dicho obispo de Lérida exponiendo en él las razones que tuvo su antecesor para no condescender con medio alguno de pacificación de los que había propuesto el Gran Prior, y las que tenía él mismo para creer que su mitra se hallaba violentamente despojada por el Gran Prior de las referidas dos parroquias de Corbines y Torrelameo y su omnímoda jurisdicción espiritual.

Por ello, mandó retirar la Audiencia y Curia Eclesiástica que el referido gran prior había puesto en la ciudad de Lérida, y que se recogiesen los títulos de provisor, notario mayor y demás que se hubiesen despachado en esta razón; y tras ello, hizo saber al Gran Prior de Cataluña que si tenía que pedir alguna cosa en razón de dichas dos parroquias, lo hiciese en la Cámara, donde el obispo estaría presto a contestarle.

96. Manuel Macías Pedrejón había muerto el 27 de diciembre de 1770.

En este estado, y habiendo expuesto el fiscal lo que tuvo por conveniente sobre el asunto, la parte del obispo presentó en la Cámara un pedimento en el que se expuso que habiendo mandado el rey, por real cédula de 19 de enero de 1773, que la orden militar de San Juan de Jerusalem y sus comendadores procedieran a la provisión y colación de los beneficios de su religión mientras se decidía y determinaba el pleito pendiente, Manuel de Montoliu solicitó que el obispo y su tribunal eclesiástico admitieran al vicario perpetuo que nombró para la vacante Iglesia Parroquial de Torrelameo de aquella diócesis, y que examinado y aprobado sinodalmente el tal vicario, pudiera hacer la colación y canónica institución de la mencionada vicaría perpetua, pues así fue la última vez y le tocaba y correspondía a derecho.

El obispo le manifestó por escrito al Gran Prior la sinrazón de querer adjudicarse semejantes facultades, y que éstas eran privativas de la dignidad episcopal por las sagradas disposiciones y leyes del reino, y que la real cédula de 19 de enero de este año no le sufragaba para semejante intento, pues no era adaptable al caso presente y sí a otros muy diversos.

Aún así, no pudo el obispo lograr que se aquietase el Gran Prior, que se hallaba empeñado en llevar adelante su empresa para lo que era necesario que acudiese al rey pidiendo que se le librase sobre-carta de la nominada real cédula, y se mandase al obispo que admitiese a examen al vicario, y permitiese que le instituyera canónicamente.

En el curato de Torrelameo no se estaba a favor del Gran Prior y sí de la dignidad episcopal de Lérida, pues al vacar dicha parroquia de Torrelameo por muerte de Antonio Rovertí —su último beneficiado—, el obispo de Lérida —Manuel Macías Pedrejón—, en conformidad de lo prevenido por el Concilio de Trento, nombró vicario o cura ecónomo para que sirviese la cura de almas hasta que se proveyese de rector. El Gran Prior de Cataluña, como señor temporal de dicho lugar, dio orden al baile para que cerrase la Iglesia y de ningún modo permitiese la entrada el vicario nombrado por el obispo. Éste, para poner en posesión al vicario, envió una embajada, pero habiendo llegado ésta a Torrelameo halló cerrada la Iglesia, conmovidos y alborotados los vecinos, y el baile salió al encuentro diciendo a los que la componían con una absoluta libertad y satisfacción que tenía orden del Gran Prior de no admitir en manera alguna al vicario. Y temerosos, se volvieron.

Así, quedó vacía la parroquia, evidenciándose que se había ido contra las disposiciones del Concilio de Trento y contra la facultad episcopal de nombrar vicario o ecónomo en las vacantes de todas las parroquias de la orden de San Juan, y de instituir canónicamente a los que hubieran de servirlos.

El obispo opinaba que el Gran Prior no podía acogerse a la real cédula, y que él debía instituir canónicamente al vicario perpetuo para que pudiese servir la vicaría de Torrelameo, examinándole para ello, sin que el Gran Prior tuviese más regalía en este acto que el puro nombramiento, que no le contradecía el obispo.

Teniendo presente el obispo que le era indispensable la obligación de mantener los derechos y regalías de su dignidad, suplicó que, en vista de los referidos motivos, el rey se sirviera negar al citado Gran Prior cualquier sobre-carta o despacho que pidiera para poder instituir canónicamente la parroquia de Torrelameo.

Y habiéndose visto en la Cámara todo lo referido, y teniendo presente que en este expediente se citaba una real donación del «*Conde de Barcelona don Raimundo Berenguer*» a favor de la mitra de Lérida de todas o las más iglesias de su obispado con todos sus diezmos, primicias y otros derechos, el obispo de Lérida se quejó del despojo que le había causado el Gran Prior de Cataluña, siendo del Real Patronato la Iglesia Catedral de Lérida, y estando los derechos de la mitra bajo la real protección; y de que el medio de la concordia había producido mayores inconvenientes; al tiempo que hizo presente ser justo conservar sus derechos a la orden de San Juan, y que todo esto requería un conocimiento de causa con audiencia instructiva de las partes.

Por decreto de la Cámara de 10 de julio de 1773, Carlos III tuvo por bien expedir carta el primero de agosto mandando al Capitán General y a la Audiencia que hiciera recoger todos los autos originales obrados en razón del citado compromiso entre el obispo de Lérida y el Gran Prior de la orden militar de San Juan de Jerusalem del Principado sobre la jurisdicción eclesiástica y espiritual en las parroquias y moradores de los lugares de Corbines y Torrelameo, y sobre la admisión del vicario perpetuo nombrado por el Gran Prior para la iglesia de Torrelameo; y que unos y otros autos los remitieran originales a la Cámara *ad effectum videndi*, haciendo emplazar a dichos obispo de Lérida y Gran Prior de Cataluña para que, dentro de los 15 días siguientes al de la notificación, acudieran a dicho Consejo de la Cámara a decir y alegar lo conveniente a sus respectivas dignidades.

El pleito se recibió a prueba en la Cámara con término de 80 días por decreto de 9 de diciembre de 1775. Dentro de este plazo, el obispo presentó dos pedimentos relacionados con su representación del 4 de marzo de 1773 –que se hallaba incluida en los autos–, demandando que sus testigos fueran interrogados y que, de los documentos presentados como prueba, fueran comprobados y cotejados los antiguos, y compulsados los nuevos.

Posteriormente, habiendo corrido 64 de los citados 80 días, el 10 de febrero de 1776 un real decreto suspendió el término de prueba que aún restaba. Y otro decreto con fecha de 2 de marzo del mismo año señaló un nuevo plazo para comprobación, cotejo y compulsas de las pruebas documentales.

Y en guarda de su derecho, el obispo requirió la compulsas de la «*constitución fundamental*» de la Iglesia de Corbines hecha por el obispo Guillermo Pérez el 29 de abril de 1568; de las pruebas presentadas por su mitra en el pleito que siguió contra la religión de San Juan y el Gran Castellán de Amposta y comendador de Huesca sobre la jurisdicción espiritual de la villa de Monzón y 22 lugares más del reino de Aragón en los años 1662 y siguientes –pleito que venció la mitra enteramente, quedando justificada su jurisdicción espiritual sobre el lugar de Corbines–; y de los documentos que se hallaren en el Archivo de Lérida correspondientes al citado lugar.

Y para que procediera a dicha probanza, el 16 de abril de 1776 Carlos III expidió una real cédula al corregidor de Lérida y a su alcalde mayor –su asesor–, otorgando un término de 34 días a partir de la notificación –ese día debía anotarse en la real cédula– a las personas que tuvieran que presentar ante ellos dichos documentos. Y para que una vez se hubiesen ejecutado comprobaciones, cotejos y compulsas, se re-

mitiese la documentación a la Cámara en carta cerrada y sellada, pagando los derechos del Real Arancel⁹⁷.

También la parte del Gran Prior quiso defender sus intereses presentando pruebas de modo que, por real cédula del 25 de julio de 1776, Carlos III volvió a dar comisión a los referidos corregidor y alcalde mayor de la ciudad de Lérida para realizar la probanza de éstas⁹⁸.

Asimismo, por decreto de la Cámara del 15 de junio anterior, se despachó otra real cédula el 25 de julio encargando la comprobación y el cotejo de unas letras en latín de presentación, recusación o protesta hechas en 1552 al oficial de la curia episcopal de Lérida por el Prior General de la Orden en Cataluña, al regente de la Audiencia del Principado, con asistencia del fiscal y citación de la parte del obispo, en un plazo de 40 días, dando después noticia de ello a la Cámara. Considerando corto el mencionado término, el Gran Prior solicitó al rey una ampliación de 20 días adicionales. Éste, interesado porque dicho testimonio en latín fuese cotejado por el regente de la Audiencia, tuvo por bien acceder a la petición⁹⁹.

Cuatro años después, aún se hallaban las partes presentando pruebas. El obispo exhibió un testimonio dado el 3 de mayo de 1780 por Joaquín Berga y Vidal –notario público y archivero de la Catedral de Lérida– de una sentencia pronunciada en el siglo XVII en otro pleito que había enfrentado a los mismos contendientes por los mismos motivos jurisdiccionales, en favor de su parte. Y suplicó al rey que providenciase lo conveniente para su cotejo y comprobación. Carlos III atendió a la petición y, por real cédula del 24 de septiembre del mismo año, requirió al gobernador de Lérida que, con la mayor brevedad, procediese a dicha probanza en la forma debida y acostumbrada¹⁰⁰.

Aunque no conocemos la sentencia definitiva del pleito, el mayor peso de los argumentos de la mitra ilerdense nos hace pensar que desniveló la balanza de la justicia en su favor. De nuevo triunfó la parte del Patronato Real.

Finalmente, contamos con dos pleitos en los que la decisión real favoreció a los obispos en perjuicio de abades de monasterios cuyas órdenes –cisterciense y benedictina– pertenecían al Real Patronato.

El primero de ellos enfrentó al abad y los monjes del monasterio cisterciense de Santas Cruces y al arzobispo de Tarragona, Juan Lario, porque éste gravó al monasterio con una pensión anual de 15 libras barcelonesas para la manutención de un sacerdote, con el único motivo de que dijese misa los días festivos en la capilla de reciente erección en el lugar de Fonscaldetas, de la baronía del monasterio; y el monasterio vio perjuicio en tal asignación al creer no estar obligado a pagar a dicho cura.

97. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 226v-228v. Dicha probanza había de hacerse ante la presencia del corregidor, de su alcalde mayor, de un escribano público que de ella diera fe, y de las dos partes contendientes.

98. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 231-233. Tres partidas de matrimonios celebrados los años 1750, 1756 y 1758 en las parroquias de los dos lugares citados.

99. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 230-231.

100. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 292v-293.

Visto en la Cámara el expediente, con lo que informaron los vicarios capitulares del arzobispado en sede vacante el 24 de marzo de 1778, y teniendo presente que la expresada pensión se impuso al monasterio en el Decreto de reducción de curatos, establecimientos de ayudas de parroquias y erección de vicarías, que formalizó el arzobispo el 10 de junio de 1772 y, con el consentimiento real manifestado en real cédula auxiliaria del 14 del mes siguiente, publicó y ejecutó, Carlos III decretó el 17 de julio de 1779 que se llevase a efecto la referida contribución. Y para que dicha provi-dencia tuviese efecto, encargó al nuevo arzobispo, Joaquín Santiyán y Valdivieso, que dispusiese lo conveniente a su cumplimiento en real cédula del 8 de agosto siguiente¹⁰¹.

Vemos, por tanto, cómo el rey respeta un decreto episcopal de erección y reducción de beneficios en contra de los intereses de un monasterio de su Real Patronato. Semejante situación es la que se produce en el siguiente expediente. Se trata de un caso excepcional porque el perjudicado es el monasterio benedictino de Nuestra Señora de Montserrat y esta orden era la más mimada por los cuidados reales.

El obispo de Vic, Bartolomé Sarmentero, y el abad del monasterio de Nuestra Señora de Montserrat se enfrentaban en un pleito sobre el modo de formalizarse el nuevo establecimiento parroquial y benefi-cial de las iglesias de Santa Cecilia, Monistrol de Montserrat y San Pedro de los Argüelles. Para hallar solución a la disputa, el 5 de diciembre de 1774 la Cámara envió al arzobispo de Tarragona, Juan Lario y Lancis, el expediente y le encargó que formalizase el decreto correspondiente para el mejor establecimiento de dichas tres iglesias, y lo remitiese original, con una copia autorizada, a ese tribunal.

El arzobispo, atendiendo al mencionado expediente y a otros informes particulares que solicitó, y en uso de sus facultades como metropolitano —que le hacían competente para este efecto—, decretó el 28 de marzo del siguiente año el establecimiento que, atendidas las circunstancias de las referidas tres iglesias, estimó conveniente y proporcionado para su mejor servicio, conforme al espíritu del Concilio de Trento, de la bula *Apostolici Ministerii* —promulgada por Inocencio XIII el 13 de mayo de 1723 a instancia del cardenal Belluga—, y de la orden conciliar de la Cámara del 12 de junio de 1769, insertando asimismo en el decreto la citada orden real del 5 de diciembre de 1774. Y envió el decreto original, junto con una copia a la Cámara, devolviendo el expediente.

En ese momento, el Procurador general de la Orden de San Benito presentó un pedimento suplicando que se le entregase el expediente, movido por el propio interés del monasterio, y el del Real Patronato, al que éste pertenecía, con la intención de exponer lo que al derecho de ambos conviniese.

La Cámara denegó la entrega del expediente al procurador, y comunicó al rey su dictamen sobre el pleito en consulta del 30 de agosto de 1775, pasando con ella el decreto.

Antes de que el rey tomase resolución, el procurador le presentó directamente un memorial en el que le informó de los perjuicios que ocasionaría el decreto al monasterio de Montserrat, especialmente por lo relativo a la erección de vicarías perpetuas

101. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 278-279.

en las referidas iglesias de Santa Cecilia, Monistrol de Montserrat y San Pedro de los Argüelles, y a su dotación y modo de provisión. Y le suplicó que suspendiese dicha erección y se oyese antes a la parte del monasterio, y que devolviese a la Cámara la consulta para que, con citación de las partes, sustanciase y determinase la causa, consultando la sentencia con su real persona; o que se sobreseyese el pleito dejando las iglesias en el estado que se hallaban antes de la formalización del decreto.

Al haber la posibilidad de un perjuicio para su Real Patronato, el 2 de noviembre de 1775 Carlos III devolvió a la Cámara su consulta con el memorial del Procurador General de la Congregación Benedictina para que, tras oír instructivamente a la parte del monasterio, con la mayor brevedad posible, le consultase de nuevo.

De ese modo, seis días después se le entregó el expediente al citado procurador para que, en el término de un mes, los representantes del monasterio expusiesen lo que se les ofreciese.

Entonces, intervino la villa de Monistrol de Montserrat, pidiendo que se le informase de todo lo que expusiese la parte del monasterio, y presentándole al rey un memorial con la pretensión de que se estableciese en su iglesia un vicario secular perpetuo. Carlos III mandó este memorial a la Cámara el 2 de febrero del año siguiente, para que el tribunal volviera a pasarle consulta. Tras ella, el rey decretó el día 10 de ese mismo mes que el monasterio devolviese el expediente y se le entregase a la villa por término de un mes, y que pasado éste, pasase todo a la vista del fiscal de la Cámara.

Habiendo sido notificados los interesados del nuevo decreto real, el 26 del mismo mes de febrero el procurador devolvió el expediente y pidió que se mandasen compulsar varios documentos y que se diese certificación de las cantidades que suponían los diezmos, primicias y pies de altar de las tres iglesias, tomando como base los tres últimos quinquenios.

El expediente pasó a manos de la parte de la villa de Monistrol, que lo devolvió el 28 de marzo de 1776 solicitando que se mandase guardar el arreglo decretado por el arzobispo de Tarragona.

Quedó, pues, toda la documentación en manos del fiscal de la Cámara, quien en respuesta del 16 de abril expuso lo que tuvo por conveniente. Y en su vista, por decreto del 27 de enero de 1777, la Cámara acordó provisionalmente no haber lugar a las pretensiones del Procurador General de la Congregación Benedictina. En defensa de sus derechos, el procurador volvió a presentar un pedimento, que pasó al fiscal.

Visto ya todo en la Cámara, ésta consultó de nuevo al rey el 7 de enero de 1778, pasándole el citado decreto formalizado por el ya entonces fenecido arzobispo Juan Lario. Y por resolución a esta consulta, Carlos III prestó su real consentimiento al decreto y lo envió en carta del 5 de junio del mismo año a los vicarios capitulares del arzobispado vacante para que dispusieran su publicación y ejecución, encargando a las autoridades eclesiásticas y ordenando a las seculares que les dieran el auxilio necesario¹⁰².

102. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 263v-268.

7. DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS EN CAUSAS CON CONFLICTOS DE COMPETENCIAS

Una vez terminada la relación de pleitos con participación de los prelados catalanes, podemos profundizar en el aspecto anteriormente esbozado de las designaciones de árbitros en causas con conflictos de competencias.

Estos conflictos de competencias los pudimos apreciar con motivo del pleito que enfrentó en 1745 al cabildo de la Iglesia Colegial de Villabeltrán con el antiguo arcipreste, Manuel de Alós y Rius, cuando éste quiso cobrar las rentas del tiempo en que estuvo ausente de dicha iglesia por ocuparse de negocios propios y no relacionados con su cargo. Alós intentó que el juez escolástico de la Universidad de Cervera –de la que era cancelario– pasara al conocimiento del pleito, aunque la reclamación del cabildo surtió efecto y el rey dictaminó que el juez competente fuera el eclesiástico de Gerona¹⁰³.

Idéntica táctica utilizó en otra ocasión. Conocemos el caso porque Jaime Olsina presentó en la Cámara un memorial informando que el 29 de julio de 1746 un albañil de Villabeltrán introdujo pleito sobre un huerto de la dignidad arciprestal que, sin razón legítima, retenía Jaime Cortada. Éste afirmó que lo tenía por vía de enajenación que en su favor hizo Manuel de Alós, adjuntando copia del instrumento de enajenación. Alós asumió la defensa de Cortada, pidiendo que el pleito fuera trasladado al juez escolástico de Cervera.

Ante ello, Olsina protestó puesto que opinaba que Cortada debía pleitear ante su juez competente y no ante el escolástico; y que tampoco tenía derecho Alós a pretender que se trasladase al de Cervera, al no defender derechos propios –por decir que el huerto era de Cortada–. Además, informó al rey que Alós despachó letras con pena de excomuniación mayor y 200 ducados contra el juez ordinario de Villabeltrán. Y acababa la representación exponiendo que Alós no podía juzgar causas que no le competían, ni establecer penas contra el juez competente –y menos en este caso que era del Real Patronato–, ni –en su calidad de arcipreste– enajenar bienes.

Visto en la Cámara, con lo expuesto por el fiscal, y en atención del real decreto de 5 de marzo de 1746, el rey ordenó por real despacho expedido diez días después que tanto el juez escolástico de Cervera como el ordinario de Villabeltrán se inhibieran del conocimiento de los autos de la instancia, y que éstos se enviaran originales para que la Audiencia los sustentara y determinara con la mayor brevedad, remitiéndolos, con las apelaciones, a la Cámara¹⁰⁴. Y separadamente, se informó al fiscal de la Audiencia que tuviera efecto la reintegración del huerto solicitada por el arcipreste Olsina¹⁰⁵.

También existió conflicto en la designación del juez competente para una apelación interpuesta en la Curia Eclesiástica del Arzobispado en 1754 por el cabildo de la Colegial de la villa de Ager contra una sentencia dada por el arcipreste. Éste mostró a Fernando VI sus quejas puesto que, al ser una de sus regalías el gozar de jurisdicción exenta, sus sentencias sólo se podían apelar ante Su Santidad o ante su nuncio apostó-

103. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 41v-44, f. 44v.

104. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 62-65.

105. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 65v-66v.

lico. El rey, al comprobar la razón del arcipreste, y de acuerdo con la Cámara, escribió la real cédula de 12 de septiembre de ese año al metropolitano y al vicario general del arzobispado para que fueran sobreseídos los procedimientos contra el arcipreste, absolviendo a los excomulgados si los hubiese¹⁰⁶.

8. INTERVENCIONES REALES EN LA FIRMA DE CONCORDIAS

Otra categoría de documentos es la que conforman los que hacen referencia a órdenes reales para que las partes enfrentadas hallen una solución definitiva a sus disputas.

El 28 de enero de 1751, el mismo Fernando VI escribió sendas reales cédulas admonitorias a los abades de los monasterios cistercienses de Poblet y Santas Cruces¹⁰⁷. En ellas, les comunicaba hallarse informado del reñido litigio que estaban siguiendo en la Corte Romana¹⁰⁸ ambos monasterios, sobre precedencia de sus abades, principalmente. Y les manifestaba su descontento al considerar que, además de turbar la buena armonía que debía existir entre dos casas tan recomendables y distinguidas por su antigüedad y su instituto¹⁰⁹, las controversias eran origen de graves detrimentos a sus intereses por los crecidos gastos que se derivaban de la prosecución del pleito, *«pasando este perjuicio desde la particular ruina de los monasterios al daño común de la causa pública por la precisión de extraer tan considerables sumas de sus reinos»*.

Por ello, el rey resolvió *«insinuarles»* que sería de su agrado que amigablemente dieran fin a tan reñido litigio *«por los medios más acomodados y oportunos»*, firmando una concordia *«que asegure para siempre la buena armonía que corresponde entre dos casas que por todas circunstancias deben ser inseparables»*; o bien, comprometiéndose a aceptar el arbitraje de dos ministros reales elegidos por ambos monasterios. Y despidiéndose en tono laudatorio¹¹⁰ para ambos prelados, Fernando VI quedó a la espera de su decisión.

De modo similar actuó Carlos III en aras de lograr la resolución del pleito que *«fatigó»* desde 1757 tanto al obispo de Solsona como al abad del monasterio de Santa María de Ripoll, sobre la unión plenaria y la jurisdicción espiritual, ordinaria y delegada de las parroquias de Marles, Borreda, Arañonet, Gargalla, Obiols y Sorba.

Fue la causa principal y de más dilatada disputa en el tiempo la calidad de legítimo diocesano con territorio separado que decía el *«venerable abad»* pertenecerle por concesiones apostólicas, observancia interpretativa y posesión inmemorial en las referidas seis iglesias parroquiales y sus pueblos. Contra esta pretensión, el obispo afirmaba que dichas parroquias y sus pueblos le pertenecían no sólo por *«districtuales»*,

106. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 326-327.

107. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 179-180v, f. 180v.

108. Lo que aún irritaba más el rey.

109. Pues el rey aclara que ambas fueron fundadas y dotadas con donaciones y privilegios por sus reales precesores.

110. Como puede comprobarse en la carta mandada al abad de Poblet: *«(...) el rey espera de su celo y amor a su servicio no menos que de su prudencia y virtud, que el abad del monasterio de Poblet concurra por su parte para que pacífica y felizmente comience, prosiga y concluya esta obra tan del servicio de Dios y del rey, dándole cuenta del medio que eligiera y de todo lo demás que ocurriere (...)»*.

sino también por estar incluidos como suyos propios en la bula de erección de la diócesis.

Fieles a sus principios, en 1757, uno y otro prelado procedieron a deputar ecónomo para la vacante de una de estas iglesias. Para solucionar la situación no quedó más remedio que acudir a la Cámara.

Allí, después de reconocer «*con particular examen*» el derecho de las partes y el correspondiente al rey en virtud del Concordato de 1753, el 22 de octubre de 1767 se insinuó a ambos prelados que «*sería del real agrado que se comprometiesen y concordasen en el particular de indicción, de concursos, formación de ternas, e institución y colación canónica*», y se despachó real cédula a dos ministros de lo civil de la Audiencia de Barcelona –José Martínez de Pons y Pablo Ignacio Amat– para que, como «*jueces arbitrarios, arbitradores y amigables componedores*», resolvieran las dudas y pretensiones que respectivamente tenían el obispo de Solsona y el abad de Ripoll, remitiendo a la Cámara la concordia que hiciesen para su aprobación¹¹¹. No obstante, la nominación no tuvo el efecto deseado por la temprana muerte de uno y el asenso del otro.

En este estado vacó la silla episcopal de Solsona, «*que por especial designación del rey*»¹¹² recayó en Rafael Lasala, quien informado de todo lo ocurrido y conociendo los derechos de su mitra, «*trató, confirió y reflexionó*» maduramente con el venerable abad sobre los puntos pendientes.

«*Poseídos los dos prelados del espíritu de paz, sinceridad de intención*» y del deseo de dar el más puntual y exacto cumplimiento a la referida insinuación de la Cámara, el 31 de octubre de 1774, firmaron, por medio de sus apoderados, una concordia útil, conveniente al reposo de sus jurisdicciones y nada perjudicial a los derechos del Real Patronato.

Por ello, le suplicaron al rey que confirmara esta transacción concediendo el real decreto de aprobación específica, y que mandara a su ministro en la corte de Roma que procurara que Su Beatitud se sirviera expedir el suyo de confirmación.

Habiéndose visto la concordia en la Cámara, con lo expuesto por el fiscal, fue remitida al arzobispo de Tarragona para que, en su vista, informase lo que tuviere por conveniente, como así hizo el 20 de abril, devolviendo el mismo instrumento.

Se volvió a ver en la Cámara, con los antecedentes, lo informado por el arzobispo y lo expuesto nuevamente por el fiscal. Examinándolo todo, dio dictamen en consulta del 17 de julio, pasando a manos del rey junto con el citado instrumento original.

Por resolución a esta consulta, el 26 de septiembre, el rey aprobó la mencionada concordia y concedió real permiso a los referidos dos prelados para que solicitaran la confirmación de Su Santidad, teniendo a bien mandar a su ministro en la corte de Roma que recomendase esta solicitud¹¹³. Pío V la confirmó y aprobó por medio de bulas expedidas en Roma el 6 de marzo de 1776. Éstas fueron presentadas en la Cámara para que Carlos III les diera su pase o Regio *Exequatur* de modo que les fueran devueltas con la real cédula correspondiente para proceder a su registro en los tribunales y

111. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 131v.

112. Haciendo uso del derecho de presentación.

113. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 219-221.

archivos de la diócesis de Solsona y el monasterio de Ripoll, sin que fuera permitida ninguna contravención.

Y teniendo en cuenta que ni la concordia ni las bulas ofendían a la regalía del Real Patronato, por decreto de la Cámara de 25 de septiembre del mismo año, Carlos III concedió el pase a las bulas, y el 6 de octubre expidió a ambas partes una real cédula auxiliatoria, que les entregó junto con los referidos escritos apostólicos, para que procediesen a su ejecución y cumplimiento sin hallar en ello dificultad alguna ni por parte de las autoridades seculares ni por parte de las eclesiásticas¹¹⁴.

Posteriormente, el 2 de febrero de 1777, Carlos III volvió a expedir un despacho para que se ejecutase y diese cumplimiento a las bulas de aprobación y confirmación de la presente concordia¹¹⁵.

Vemos, pues, que en este caso queda patente el celo y las reservas del rey para que su regalía del Real Patronato no fuera «ofendida».

No es éste el único caso de concordia. En la documentación hallamos otros cuatro, que desarrollamos por orden cronológico.

La primera de ellas puso paz en 1747 a los litigios suscitados entre el obispo de Vic y el abad del monasterio de Ripoll¹¹⁶. Conocemos su existencia gracias a que este último informó a Fernando VI que tenía «*ajustado un concordato*» con el obispo de Vic según el cual éste le había concedido la villa y distrito o parroquia de Ripoll, y las parroquias de San Julián de Saltón y Santa María de Vidabona, y que, pese a ello, no había podido tomar posesión de dicho territorio ni de su jurisdicción ordinaria, ni de la potestad delegada reservada a los obispos por la disposición del Concilio de Trento¹¹⁷, porque para poder realizar tal cesión de competencias se necesitaba la aprobación pontificia.

Y por ello, le suplicó al monarca que, al ser tan conveniente la concordia para la perpetua paz entre «*las dos mitras*»¹¹⁸ y la prevención de pleitos en lo venidero, diese orden a sus ministros en la corte romana para que solicitasen en su real nombre la confirmación del concordato con las calidades referidas.

Visto en la Cámara, con lo informado por la Audiencia del Principado y lo expuesto por el fiscal, por decreto de 5 de agosto de 1747, el rey resolvió aprobar el concordato y atender a la petición del abad de Ripoll.

De idéntica forma actuó Carlos III en 1761 ante la solicitud conjunta del obispo de Gerona y el abad del monasterio de San Pedro de Camprodón presentada ante él para lograr la aprobación de la concordia celebrada entre ambos, solucionando el litigio que había perturbado la paz de sus súbditos y ocasionado grandes dispendios, sobre puntos de jurisdicción. Vista la transacción en la Cámara, el rey la aprobó por cé-

114. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 235v-237.

115. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 241v.

116. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 107-110v.

117. Dentro de los referidos límites el abad tendría las mismas facultades que competen a los obispos en sus diócesis (congregar sínodo, conceder dimisorias a los seglares para ser promovidos a cualquier orden y conferirles la tonsura y órdenes menores).

118. El abad ya se considera mitrado, por las atribuciones que va a obtener en virtud de la concordia.

dula del 5 de marzo, y ordenó a sus representantes en la corte romana que hicieran lo posible para lograr con la menor dilación posible la confirmación pontificia¹¹⁹.

Las dos concordias que hemos dejado para el final presentan una importante novedad. La causa del litigio no es de orden jurisdiccional, en sentido estricto, como las que hemos reflejado con anterioridad, sino que el punto controvertido se refiere a la enajenación de una propiedad.

Anselmo Rubio, abad del monasterio de San Pedro de Besalú, «celebró y otorgó escritura y concordia» con Isidro y Antonio Ferrán y Batlle –padre e hijo–, dueños patrimoniales del dominio útil de la montaña de Cólera, con la intención de evitar los continuados pleitos, gastos y discordias que afectaban a ambas partes, y de restablecer la antigua población y feligresía que con la invocación de San Miguel hubo en ella, derruida por las guerras, capaz para 300 casas, y con un terreno muy propicio para viñas y olivares.

Y, en atención a lo estipulado en el último capítulo del acuerdo, para su mayor firmeza y perpetua estabilidad, el abad solicitó la real aprobación, presentando una copia auténtica de la expresada escritura, fechada el 10 de febrero de 1768.

Habiéndose visto en la Cámara, con lo expuesto por el fiscal, y teniendo presente los tres fines muy útiles que tenía la concordia¹²⁰, y que ambas partes convinieron solicitar la confirmación e interposición del correspondiente decreto de la Santa Sede y la real aprobación, la Cámara estimó que no era necesario el decreto de la Silla Apostólica para la firmeza de lo pactado, pues además de que su impetración sería muy costosa para ambas partes –«porque nunca se expide en Roma sin que proceda comisión ad partes»–, sería abusivo y perjudicial para las regalías de la corona. Por ello, la Cámara acordó el 14 de mayo de 1768 que no se solicitara la confirmación apostólica y se practicaran las diligencias que, «para la firmeza y seguridad de semejantes actos, prescriben los cánones y el derecho».

En consecuencia, por orden de la Cámara del 25 de mayo se previno al abad que practicase dichas diligencias con las formalidades siguientes, «que podrían servir de regla para los casos que ocurran en lo sucesivo»:

«Que el abad, en el uso de su jurisdicción ordinaria, se asegurara de la certeza de los hechos referidos en la citada concordia, así como de su utilidad. Que convocase a todos los monjes para comunicarles el asunto. Que, juntándose éstos en tres diferentes días, lo tratasen, examinasen y votasen. Que, consentida la enajenación por los monjes, la aprobase y autorizase el abad. Y finalmente, que el abad la remitiera al rey, como protector y patrono del monasterio, para que interpusiere real decreto y confirmación».

Y habiendo practicado el abad todas las diligencias en la forma que previno la Cámara, le dio cuenta de ello el 16 de julio de 1768, «acompañando un traslado o copia por concuerda de los autos formados para la práctica de dichas diligencias, sacado, signado y formado del nominado Emanuel Antentas, ante quien se actuaron y

119. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 59v-82.

120. A saber, «extinguir los pleitos, gastos y discordias entre ambas partes; establecer firme y perpetuamente los derechos respectivos por medio de un establecimiento en enfiteusis de la montaña de Cólera; y restablecer la antigua población y feligresía de San Miguel de Cólera, por medio de las subenfiteuticaciones, levantamientos de casas, construcción de iglesia, conducción de aguas, etc.».

pasaron». Y visto en la Cámara, el rey concedió la real aprobación a la mencionada transacción y concordia¹²¹.

La última de las concordias también hace referencia a Anselmo Rubio, abad del monasterio benedictino claustral de San Pedro de Besalú. Éste informó a Carlos III que Gaspar Paratge, abad que fue del antiguo monasterio de San Quirce de Còlera (cuyos diezmos y derechos estaban unidos al monasterio de Besalú en virtud de concesiones apostólicas y reales), por escritura del 3 de abril de 1549 ante el notario de Barcelona Gerónimo Mollet, concedió en enfiteusis a Juan Riusech y los suyos las montañas de Gravet y Franxenet, sitas en el término y parroquia del mismo lugar de San Quirce por cierto precio, y con varios pactos y condiciones.

No obstante, en 1553, dichas montañas fueron repartidas entre otros subenfiteutas. Y posteriormente, hubo faltas de cumplimiento en los términos acordados, que propiciaron que el 3 de septiembre de 1664 firmasen una transacción Francisco Bernardo de Pons y de Torrell –abad del monasterio de Besalú–, y Antonio Baill y Jacinto Guanter y Trobat –poseedores de las mencionadas montañas–, ante el notario Gerónimo Soler, en la que quedó ratificado el establecimiento enfiteutico a cambio del pago de un censo anual de 60 libras, entre otras condiciones.

Después de muchos años, la posesión y el dominio útil de las expresadas montañas recayó en José Cremadells¹²²; y entre éste y el abad Anselmo Rubio se suscitaron diferentes cuestiones relativas a las condiciones del antiguo establecimiento –si en él se reservaban los árboles, o si podrían reducirse las yermas montañas a cultivo, para beneficio de la abadía y común y pública utilidad–; tiranteces que parecían abocar a un pleito judicial.

Para evitarlo, las partes pudieron llegar a una concordia el 27 de noviembre de 1778. En ella se revalidó en favor de Cremadells y sus descendientes el establecimiento enfiteutico de las citadas montañas, quedando en éste incluidos los árboles, junto con otras variadas condiciones.

Dicha concordia otorgada por el abad, fue aprobada por el cabildo de monjes del monasterio, «*precedida cierta información de utilidad y maduro examen y conferencia*», siendo reconocida como «*justa, útil y beneficosa no sólo a la dignidad abacial de Besalú, sino también a la causa pública y a la Real Hacienda*». Y tras ello, Anselmo Rubio suplicó la aprobación real, y la expedición de la real cédula correspondiente para su perpetuo cumplimiento y observancia.

La concordia se sometió al examen de la Cámara. Y teniendo presente que el convenio se había pactado con pleno acuerdo de los monjes del monasterio, y conociendo el beneficio que supondría para éste, por el propio partido que sacaría de él, y por el hecho de evitar el seguimiento de un pleito, que a sus altos costes añadiría la incomodidad de tener que litigar con un sujeto domiciliado fuera de España (Cremadells residía en San Lorenzo de Sardá, en el Rosellón); el rey, por decreto del 29 de mayo de 1779, aprobó y confirmó la referida concordia, devolviéndola al abad junto con una carta auxiliatoria del 10 de junio de 1779 para facilitar su cumplimiento¹²³.

121. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 134-138.

122. La cédula nos ofrece su pomposo nombre completo: José Cremadells Salacruz March y Mitjavila Burgues de Perpiñán.

123. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 275v-277.

9. CONCLUSIONES

A lo largo del siglo XVIII, la actitud de la Corona hacia cualquier asunto concerniente al Real Patronato destacó por su constante atención. Hay que destacar que en el preciso instante en que los monarcas tenían noticia de que había quedado vacante cualquier beneficio sobre cuyo patronato –y consiguiente provisión– pudiesen existir dudas, por pequeñas o poco fundadas que fueran, reaccionaban desplegando toda una serie de medidas –averiguaciones, secuestros de rentas, retención de letras lesivas– a futuro gravamine, es decir, en prevención de cualquier detrimento de sus intocables regalías, y con tan inusitada celeridad que podríamos arriesgarnos a afirmar que, en este campo burocrático, las cosas de palacio quizá no fueran tan despacio.

Y tan destacable como esta constante predisposición fue la cuasi secular tenacidad que mostraron a la hora de intentar extender las redes de su Real Patronato y «pescar» el derecho de presentación de nuevos beneficios. Buena muestra de ese infatigable fervor por la ampliación de su Regio Patronazgo fueron los casos de los prioratos de Santa María de Meyá y San Pedro de Burgal, que tuvieron su origen en el siglo XVII.

Además, el hecho de que Fernando VI convirtiera en ley la normas que se habían venido siguiendo para el conocimiento de las causas del Real Patronato nos muestra el declarado interés de la Corona por seguir las muy de cerca, y por alejar de ellas la injerencia de cualesquiera otros jueces, tanto seculares como eclesiásticos. Siguiendo la tradición anterior, los pleitos relacionados con el Patronato Real que se suscitaban, indefectiblemente, irían abocados en primera instancia a las Audiencias territoriales –en nuestro caso, la de Barcelona–, y las apelaciones a sus sentencias serían vistas aún más cerca, en la misma Cámara de Castilla.

De este modo, la Corona podía asegurarse de tener estos asuntos alejados de las intrusiones de todos y cada uno de los jueces de sus reinos de España, pero aún le restaba una más importante y, sin duda, dura tarea: hacer frente a los afanes de la Santa Sede por extender sus reservas pontificias a beneficios ajenos a su patronato.

En este aspecto, los monarcas no dieron pie a ningún tipo de concesiones, procurando impedir por todos los medios a su alcance cualquier intervención apostólica en lo que consideraban su ámbito de protección: las iglesias de sus reinos, la Iglesia nacional.

Así, ante los intentos de hacer efectivas las bulas de provisión de determinadas prebendas dudosas, los reyes dieron órdenes a las autoridades eclesiásticas para que se lo impidiesen a sus beneficiados, requisaran en su nombre dichos documentos, y los enviaran a la Cámara donde, tras un pormenorizado estudio, se les negaría el pase regio y quedarían retenidas hasta la resolución de la lite. De cualquier forma, este sistema no fue efectivo en la totalidad de las ocasiones. Los pleitos de patronato suscitados los años previos al Concordato de 1737 se decantaron del lado pontificio pues, como indicamos, su artículo 23 suspendía cualquier controversia, y permitía al papa –o a los respectivos ordinarios en sus meses– la provisión de los beneficios disputados. Efecto contrapuesto supuso, en cambio, el Concordato de 1753 que, con la excepción de un corta nómina de piezas eclesiásticas, concedió a la Monarquía española el Real Patronato Universal.

Junto a este vigoroso y rígido ejercicio de la regalía del *exequatur*, los monarcas también intentaron evitar las referidas intromisiones de la Santa Sede procediendo al blindaje del patronato particular de determinados beneficios, o agotando todos los medios posibles para que los pleitos entre las diferentes instituciones eclesiásticas no llegaran a los tribunales de la Curia Romana. Y todo ello dentro de los cauces de la más estricta legalidad, pues ni siquiera el hecho de que el Real Patronato se viese notoriamente perjudicado sirvió para que la sentencia de un proceso fuese modificada en favor de la parte real.

Finalmente, cabe señalar que si observamos la dedicación de los monarcas estudiados por cubrir las necesidades espirituales de sus súbditos –mediante la creación de vicarías u otras piezas eclesiásticas–, o por el correcto funcionamiento interno de la Iglesia de sus reinos –evitando malversaciones de fondos, instigando a la firma de concordias, o solucionando choques de competencias jurisdiccionales–, podremos afirmar, sin duda, que los primeros Borbones pudieron jactarse de cumplir con creces su papel de patronos de la Iglesia nacional.